



**Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos**

Distr. general
7 de marzo de 2014
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

**Examen de los informes presentados por
los Estados partes en virtud del artículo 40
del Pacto**

**Tercer informe periódico que los Estados partes
debían presentar en 2008**

Suriname*

[8 de octubre de 2013]

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

GE.14-41491 (EXT)



* 1 4 4 1 4 9 1 *

Se ruega reciclar



Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
Lista de siglas.....		4
I. Introducción.....	1–10	5
II. Información general y respuestas a las preocupaciones y recomendaciones del Comité.....	11–166	7
A. Información general.....	11–38	7
B. Respuestas a las principales preocupaciones y recomendaciones formuladas por el Comité durante el examen de anteriores informes.....	39–166	11
III. Difusión de información relativa al Pacto, artículos 1 a 27.....	167–262	37
Artículo 1. El derecho de libre determinación y la libre disposición de las riquezas y recursos naturales.....	168–171	37
Artículo 2. Obligación de respetar los derechos sin discriminación y derecho a la protección judicial.....	172–175	38
Artículo 3. Igualdad de derechos de hombres y mujeres.....	176–184	39
Artículo 4. Emergencia pública proclamada oficialmente por los Estados partes.....	185–186	42
Artículo 5. Interpretación del Pacto de manera que no sea contraria a sus objetivos.....	187	42
Artículo 6. El derecho a la vida.....	188–194	42
Artículo 7. Prevención de la tortura.....	195–199	43
Artículo 8. La esclavitud.....	200–202	44
Artículo 9. Derecho a la libertad y a la seguridad personales.....	203–217	45
Artículo 10. Trato humano de las personas privadas de libertad.....	218–221	47
Artículo 11. Encarcelamiento por el no cumplimiento de una obligación contractual.....	222	48
Artículo 12. Derecho a circular libremente y a escoger su residencia.....	223–227	48
Artículo 13. Expulsión de extranjeros.....	228	49
Artículo 14. Derecho a un juicio con las debidas garantías, presunción de inocencia, derechos de los acusados, indemnización y <i>ne bis in idem</i>	229	49
Artículo 15. No retroactividad de la legislación relativa a la responsabilidad penal.....	230	49
Artículo 16. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.....	231	50
Artículo 17. No injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada.....	232	50
Artículo 18. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.....	233	50
Artículo 19. Libertad de expresión.....	234–237	50
Artículo 20. Prohibición de la propaganda en favor de la violencia.....	238–239	51
Artículos 21 y 22. Libertad de reunión y libertad de asociación (libertad sindical).....	240–243	51

Artículo 23. La protección de la familia y el matrimonio	244	52
Artículo 24. Protección del niño.....	245–253	52
Artículo 25. Derecho a participar en la gobernanza del país sin restricciones	254	53
Artículo 26. No discriminación	255–259	54
Artículo 27. Respeto de las minorías.....	260–262	54
IV. Observaciones finales.....	263	55
V. Conclusión	264–266	55

Anexos**

** Los anexos pueden consultarse en los archivos de la secretaría.

Lista de siglas

ACM	Association of Caribbean Media Workers
BKV	Oficina de Política de la Mujer y el Niño
CARICOM	Comunidad del Caribe
CBB	Oficina Central de Asuntos Civiles
CPIL	consentimiento previo informado y libre
CSM	Centro de Servicios Mineros
EPU	examen periódico universal
ERAS	evaluación de la repercusión ambiental y social
JKB	Servicio de Protección del Niño Judicializado
L-Decreet	Decreto de Reforma Agraria
LGBT	lesbianas, gais, bisexuales y transexuales
MICS	encuesta a base de indicadores múltiples
OEA	Organización de los Estados Americanos
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
ONG	organización no gubernamental
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OPZ	Departamento de Investigación del Personal del Cuerpo de Policía
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RAIO	curso de formación para funcionarios judiciales
SB	Staatsblad (<i>Boletín Oficial del Estado</i>)
sida	síndrome de inmunodeficiencia adquirida
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
VIH	virus de la inmunodeficiencia humana
VOJ	establecimiento de enseñanza secundaria
VOS	establecimiento de enseñanza terciaria

I. Introducción

1. De conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno de la República de Suriname presenta al Secretario General de las Naciones Unidas su tercer informe periódico para su examen por el Comité de Derechos Humanos.
2. La República de Suriname se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 28 de diciembre de 1976 (Colección de Tratados de las Naciones Unidas: http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en). De conformidad con el artículo 40 del Pacto, la República de Suriname ya ha presentado dos informes. Los presentes informes periódicos tercero y cuarto combinados abarcan el período de 2003 a 2013.
3. Estos informes periódicos tercero y cuarto combinados, de los cuales el tercero debía presentarse el 1 de abril de 2008, complementan los informes presentados anteriormente por el Estado parte. Se ajustan a las directrices generales proporcionadas por el Comité para la presentación de informes periódicos. También toman en cuenta las observaciones finales formuladas por el Comité de Derechos Humanos durante el examen del segundo informe periódico de Suriname en su 80º período de sesiones (30 de marzo de 2004, CCPR/CO/80/SUR). También se han tomado en consideración las respuestas del Gobierno de Suriname a las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos (10 de julio de 2008, CCPR/C/SUR/CO/2/Add.1), así como el seguimiento de las observaciones finales (20 de febrero de 2009, CCPR/C/95/2).
4. La República de Suriname todavía no ha presentado un documento básico común. Según las directrices para la presentación de informes de los Estados partes, este informe periódico es un documento único compuesto por dos secciones principales y dos adicionales.
5. La primera sección principal (cap. II) lleva el título "Información general y respuestas a las preocupaciones y recomendaciones del Comité". En ella se describe la estructura política general del país y el marco dentro del cual se promueven y protegen los derechos humanos. También contiene las respuestas de la República de Suriname a las recomendaciones formuladas por el Comité durante el examen de su segundo informe periódico.
6. La segunda sección principal (cap. III) se refiere a determinadas disposiciones sustantivas del Pacto y da cuenta del progreso realizado por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones conexas que impone el Pacto; el capítulo IV contiene las observaciones finales.
7. El capítulo I contiene la introducción y, después de las dos secciones principales, el capítulo V da cuenta de las conclusiones.
8. El presente informe debe ser considerado en el contexto de varios acontecimientos políticos clave ocurridos en la República de Suriname desde la presentación de su segundo informe periódico en 2003. Después de esa fecha, la República de Suriname demostró que ha permanecido fiel a su tradición de democracia multipartidista estable mediante la celebración efectiva de elecciones limpias y libres en 2005 y 2010.
9. La República de Suriname también sigue comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos y con el estado de derecho. Puede afirmarse que los derechos humanos y las libertades fundamentales están garantizados y protegidos por la Constitución.

10. Suriname comunica al Comité que el presente informe se elaboró mediante un proceso inclusivo, transparente y participativo en el que intervino toda la sociedad; por ejemplo, se solicitaron comentarios y aportaciones por medio de Internet (<http://www.gov.sr/sr/ministerie-van-juspol/actueel/bupo-2013-concept.aspx>). Concretamente, se consultó a los sectores público y privado y a la sociedad civil. Participaron los siguientes organismos y organizaciones.

Organismos gubernamentales

- Ministerie van Defensie/Militaire Politie (Ministerio de Defensa/Policía Militar);
- Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Ministerio de Educación);
- Ministerie van Binnenlandse Zaken/Nationaal Bureau Genderbeleid (Ministerio del Interior/Oficina de Asuntos de Género);
- Ministerie van Regionale Ontwikkeling (Ministerio de Desarrollo Regional);
- Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda);
- Ministerie van Justitie en Politie/Bureau Vrouwen en Kinder beleid (Ministerio de Justicia y Policía/Oficina de Política de la Mujer y el Niño);
- Ministerie van Justitie en Politie/Doorgangshuis "Opa Doeli" (Ministerio de Justicia y Policía/Centro de Detención Juvenil Opa Doeli);
- Ministerie van Justitie en Politie/Delinquentenzorg (Ministerio de Justicia y Policía/Cuidado del Delincuente);
- Ministerie van Justitie en Politie/afdeling Wetgeving (Ministerio de Justicia y Policía/Departamento de Asuntos Jurídicos); y
- Korps Politie Suriname (Cuerpo de Policía de Suriname).

Organizaciones no gubernamentales

- Fundación Stop Violence Against Women;
- Fundación Ilse Henar Hewitt for Women's Rights;
- Fundación Projekta;
- Asociación de las Naciones Unidas en Suriname; y
- Plataforma LGBT.
- Stichting Nabestaanden 8 December 1982 decidió no participar directamente en las consultas que fueron convocadas, pero gracias a la disponibilidad pública del proyecto de informe pudo transmitir sus comentarios y preocupaciones en distintos foros, como los medios de comunicación. Los comentarios y preocupaciones así recibidos también fueron considerados e incorporados al presente informe.

Organismos especializados de las Naciones Unidas

- UNFPA;
- PNUD, y
- Organización Panamericana de la Salud (OPS, organismo especializado regional de las Naciones Unidas).

II. Información general y respuestas a las preocupaciones y recomendaciones del Comité

A. Información general

Características geográficas de la República de Suriname

11. Suriname se encuentra en América del Sur, entre los 2° y los 6° de latitud N y los 54° y 58° de longitud O. Aproximadamente el 80% de su superficie está cubierta por vegetación neotropical. La temperatura media es de 27,3° C. Las temperaturas más altas se registran en septiembre y octubre, y las más bajas en enero y febrero.

Estructura política

12. Suriname es una democracia constitucional en la que el Presidente es elegido por la Asamblea Nacional unicameral o por la más amplia Asamblea del Pueblo Unido, integrada por los 51 miembros de la Asamblea Nacional y los miembros elegidos de los órganos representativos regionales, es decir los 106 miembros de los concejos de distritos y los 737 miembros de los concejos locales. La Asamblea del Pueblo Unido está así integrada por un total de 894 miembros. En 2005 y 2010 se celebraron elecciones libres, limpias y secretas que permitieron que la República de Suriname fuera gobernada por Presidentes elegidos democráticamente. El Presidente nombra al Consejo de Ministros. El último decenio se ha caracterizado por gobiernos de coalición formados por alianzas elegidas de los partidos políticos. En 2005 y 2010 se celebraron elecciones generales y asumieron el poder, respectivamente, los gobiernos Venetiaan-Ajodhia y Bouterse-Ameerali. El Estado sigue gobernado democráticamente.

13. El capítulo XI de la Constitución establece que el poder legislativo es ejercido conjuntamente por la Asamblea Nacional y el Gobierno. El artículo 2 del capítulo XIII y el capítulo XXI disponen, respectivamente, que el poder ejecutivo incumbe al Presidente y los gobiernos locales.

14. El capítulo XV se refiere al poder judicial y a las características del Presidente y el Vicepresidente del Alto Tribunal de Justicia, la judicatura, el Fiscal General y el ministerio público.

Derechos humanos

15. Puede afirmarse que los derechos humanos y las libertades fundamentales están garantizados y protegidos en general por la Constitución, y en particular por sus capítulos V y VI.

16. Con respecto al informe periódico inicial de 1979, el presente informe confirma que Suriname sigue siendo parte en diversos instrumentos y mecanismos de derechos humanos regionales y de las Naciones Unidas. Con posterioridad a la presentación del segundo informe periódico en 2003, Suriname ratificó las siguientes convenciones sobre derechos humanos y otros tratados conexos: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (10 de abril de 2012); Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 15 de noviembre de 2000 (25 de mayo de 2007); Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000 y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente

mujeres y niños; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 15 de julio de 2008.

17. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalizaron los casos *Aloeboetoe* y *Gangaram Panday*. En cuanto al caso de la matanza de Moiwana, las conclusiones han sido aplicadas casi en su totalidad. Las obligaciones de indemnizar fijadas por las sentencias de dicha corte se han cumplido, en tanto que continúa la investigación penal respectiva. En relación con el caso *Moiwana*, el Estado está elaborando las medidas específicas, entre otros en los ámbitos legislativo y administrativo, que son necesarias para garantizar los derechos a la propiedad en los territorios tradicionales de los miembros de la comunidad moiwana, especialmente el derecho a la tierra. Esta cuestión aún no ha sido resuelta debido a su complejidad. Por ejemplo, una tribu indígena de la aldea de Alfonsdorp, cercana a la aldea cimarrona de Moiwana, reclama la zona moiwana como su territorio tribal tradicional. Con respecto a los derechos a la tierra de las comunidades tribales e indígenas, Suriname realiza un intenso esfuerzo por aportar la solución más adecuada para cumplir y aplicar a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Saamaka*.

18. Suriname cumplió su obligación de informar al Grupo de Trabajo sobre el EPU y aclaró oralmente su informe durante los períodos de sesiones celebrados en mayo y septiembre de 2011 en Ginebra. La República de Suriname se comprometió a aplicar varias recomendaciones formuladas al amparo del EPU durante dichas reuniones y actualmente procede a ponerlas en práctica.

19. Varios problemas socioeconómicos que enfrenta Suriname, como la lucha contra la pobreza, los derechos a la tierra de las comunidades tribales indígenas y cimarronas, la extracción ilegal de oro y el riesgo de contaminación del medio ambiente, así como la lucha contra la delincuencia, exigen una cantidad considerable de tiempo y recursos, por ejemplo financiación e idoneidad técnica, para ser eficazmente resueltos. Por estos motivos, el Gobierno de Suriname sigue trabajando con interlocutores nacionales e internacionales para responder con eficacia a dichos problemas.

Información demográfica

20. Suriname es una sociedad multiétnica en la cual dos poblaciones étnicas tienen una estructura social tribal: los indígenas que residen a lo largo de la costa así como en el interior profundo y los cimarrones, que son descendientes de esclavos que se fugaron y se establecieron en el interior del país.

21. En agosto de 2012 se llevó a cabo en Suriname el Octavo Censo General de Población y Vivienda. El resultado ha sido publicado por la Oficina General de Estadística¹.

22. Según los resultados del censo de 2012, Suriname cuenta con una población residente permanente estimada en 541.638 personas², que vive en una superficie de 16.594.000 ha. En los distritos urbanos, es decir la capital Paramaribo y el distrito de Wanica, que abarcan apenas el 0,4% de la superficie del país, habitaba aproximadamente el 66,8% de la población total del país en 2004, y el 66,3% en 2009. En el distrito de Sipaliwini, que abarca casi toda la parte meridional del país (el 79,75% de la superficie), la población representaba aproximadamente el 6,9% del total en 2004, y el 7,3% en 2009. El distrito de Coronie cuenta con la población más reducida (el 0,6% en 2004 y en 2009)³. En el interior hay asentamientos dispersos de comunidades tribales indígenas y cimarronas.

¹ Resultados del Octavo Censo General de Población y Vivienda, volumen I, septiembre de 2013.

² *Ibid.*, cifra D0; Relación entre la población *de jure* y *de facto*, pág. 19.

³ Atlas 2013 de Desarrollo Humano en Suriname, Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Suriname, págs. 26 y 27, y Oficina General de Estadística de Suriname.

23. La población masculina del país se calcula en 270.629 personas, y la femenina en 271.009 personas⁴. Los datos desagregados en función de la edad de la población nacional muestran las siguientes cifras:

- 148.767 niños de 0 a 14 años;
- 334.949 personas de 15 a 59 años;
- 54.527 personas mayores de 60 años;
- 3.395 personas de edad indeterminada⁵.

24. La población de Suriname está integrada por varios grupos étnicos a los que se permite continuar hablando libremente sus idiomas propios y disfrutando la cultura de sus países de origen. Suriname es un mundo en miniatura compuesto por indostanos: 148.443 personas (27,4%); criollos: 84.933 (15,7%); javaneses: 73.975 (13,7%); cimarrones: 117.567 (21,7%); chinos: 7.885 (1,5%); pueblos indígenas: 20.344 (3,8%); afrosurinameses: 3.923 (0,7%); mestizos: 72.340 (13,4%); caucásicos: 1.667 (0,3%); el resto: 7.166 (1,3%); sin raza determinada: 1.805 (0,3%) y personas que no respondieron a la encuesta: 1.590 (0,3%) (cifras basadas en el censo de 2013).

25. El holandés sigue siendo el idioma oficial, y el sranan tongo la *lingua franca*, mientras que el inglés está muy extendido. Además se hablan idiomas asiáticos: hindi sarnami, javanés de Suriname y varios dialectos chinos. Los idiomas hablados por los cimarrones son: okanisi, saamaka, pamaka, kwinti, aloekoe y matawai, mientras que los idiomas indígenas hablados en Suriname son: akurio, caribe, trio, wayana, warao y arowak.

Evolución histórica del sistema jurídico en Suriname

26. Desde el siglo XVIII Suriname ha estado bajo la influencia del derecho romano, el derecho canónico, el *common law* y el antiguo derecho holandés (germánico). En 1869 fue introducido en Suriname el sistema de legislación holandés a través de su codificación. Sobre la base del principio de concordancia, se armonizó la legislación vigente en Suriname con la del colonizador holandés. En los casos en que las leyes holandesas no pudieron ser aplicadas en Suriname se adoptaron leyes nacionales.

27. Suriname se convirtió en república independiente el 25 de noviembre de 1975, momento en el que entró en vigor la Constitución de la República de Suriname. De conformidad con el artículo II de los artículos adicionales de la Constitución de 1975, todos los actos legislativos anteriores a la independencia pasaron a ser leyes de Suriname. El 25 de febrero de 1980 el Gobierno democrático fue derrocado por un golpe de Estado militar, que tuvo como secuela que el régimen militar que ocupó el poder suspendiera la Constitución de 1975. En 1987, después de la celebración de un referéndum público, se aprobó una nueva Constitución compuesta en su mayoría por disposiciones anteriores a la independencia. La Constitución de 1987 sigue vigente, con algunas enmiendas.

Marco constitucional y jurídico

28. El derecho surinamés se divide en derecho público y derecho privado, y consiste en un sistema codificado. El marco jurídico se basa fundamentalmente en la Constitución y está compuesto, entre otros, por el derecho público, el procedimiento civil, el derecho civil, el derecho penal y el procedimiento penal. La jerarquía de las normas jurídicas en el país es la siguiente: 1) las convenciones internacionales; 2) la Constitución de la República de

⁴ Resultados del Octavo Censo General de Población y Vivienda, cuadro 4: desglose de la población por nacionalidad, edad y sexo, pág. 44.

⁵ *Ibid.*, cuadro E: población en 2004 y 2012 por grupo de edad, así como su crecimiento de 2004 a 2012, pág. 21.

Suriname; 3) las leyes nacionales; 4) las resoluciones presidenciales; 5) los decretos nacionales derivados de leyes nacionales; y 6) los decretos ministeriales derivados de leyes nacionales.

29. La Constitución de la República de Suriname es la ley nacional suprema del país, que establece y define la autoridad de los órganos principales del Estado. Todas las demás normas jurídicas y leyes deben ajustarse a la Constitución, pues de lo contrario serían nulas e írritas.

30. El preámbulo de la Constitución contiene la garantía del respeto de los principios de libertad, igualdad y democracia y de los derechos humanos y libertades fundamentales. En los capítulos V y VI de la Constitución se describen los distintos derechos y libertades fundamentales así como la manera en que puede protegérseles. El artículo 10 de la Constitución establece que "En caso de violación de sus derechos y libertades, toda persona tiene derecho a ser oída públicamente, en condiciones de igualdad y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial".

31. El capítulo XI de la Constitución dispone que el poder legislativo es ejercido conjuntamente por la Asamblea Nacional y el Gobierno. El artículo 2 del capítulo XIII y el capítulo XXI establecen, respectivamente, que el poder ejecutivo incumbe al Presidente y los gobiernos locales.

32. El capítulo XV se refiere al poder judicial: el Presidente y el Vicepresidente del Alto Tribunal de Justicia, la judicatura, el Fiscal General y el ministerio público.

33. En resumen, puede afirmarse que la Constitución garantiza y protege los derechos humanos y las libertades fundamentales.

34. La legislación de Suriname establece dos autoridades para la administración de justicia: los tribunales cantonales, que son los tribunales de primera instancia, y el Alto Tribunal de Justicia, que es el tribunal de apelaciones (art. 39 de la Constitución). Suriname también reconoce la jurisdicción original de la Corte de Justicia del Caribe para la interpretación del Tratado Revisado de Chaguaramas y la jurisdicción en lo contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

35. El marco relativo a los derechos humanos tiene un componente jurídico y un componente institucional. El jurídico está integrado por las normas constitucionales, otras leyes nacionales de Suriname y el derecho de los tratados internacionales y regionales. El componente institucional está integrado por las instituciones gubernamentales, las ONG y los mecanismos internacionales y regionales, todos ellos relativos a distintos aspectos de los derechos humanos.

Poder judicial: la judicatura

36. El poder judicial está regido por la Ley de Organización y Composición del Poder Judicial de Suriname y está integrado por la judicatura y el ministerio público. De conformidad con dicha ley, la jurisdicción en las causas civiles y penales corresponde a los tribunales cantonales y al Alto Tribunal de Justicia, excepto cuando la jurisdicción penal se atribuye a otro juez (art. 2). La jurisdicción en las causas civiles y penales la comparten tres tribunales cantonales, que funcionan como tribunales de primera instancia, y el Alto Tribunal de Justicia, como tribunal de apelaciones. Este último también ejerce jurisdicción en las causas penales contra personas que ocupan cargos políticos⁶ y en las controversias entre funcionarios públicos y el Estado. El Alto Tribunal de Justicia es también la autoridad administrativa del sistema judicial y está integrado por un Presidente, un Vicepresidente y

⁶ Véase el Anexo 1, Constitución de la República de Suriname, art. 140. Véase también el párrafo 230 del presente informe.

40 miembros como máximo⁷. En este tribunal también desempeñan sus funciones un Fiscal General, dos Abogados Generales y un Secretario, todos ellos nombrados por el Presidente (art. 32). El Presidente en funciones ha informado que actualmente hay 16 jueces en el Alto Tribunal de Justicia de Suriname. Se está llevando a cabo en la actualidad un curso de formación para funcionarios judiciales⁸ y en un plazo de tres años se nombrará a nuevos jueces.

Poder judicial: el ministerio público

37. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Organización y Composición del Poder Judicial de Suriname, el Fiscal General y los Abogados Generales del Alto Tribunal de Justicia, los fiscales principales y los demás fiscales y sus suplentes tienen a su cargo hacer cumplir las leyes, interponer acciones penales en todos los delitos sometidos al Alto Tribunal de Justicia y a los tribunales cantonales, y ejecutar todas las sentencias de dichos tribunales. El Fiscal General del Alto Tribunal de Justicia está obligado a acatar las órdenes que en ejercicio de sus funciones le sean impartidas por el Presidente o en su nombre (art. 4). El Fiscal General ha informado que actualmente el ministerio público cuenta con 21 miembros.

Abogados

38. Las personas con formación jurídica que satisfacen los requisitos establecidos por el Presidente del Alto Tribunal de Justicia pueden ingresar como abogados en este tribunal. El Presidente tiene a su cargo la autorización y supervisión de las actividades de los abogados, ejerce funciones disciplinarias y determina el atuendo profesional de dichos letrados (art. 43 de la Ley de Organización y Composición del Poder Judicial de Suriname). El Secretario del Colegio de Abogados de Suriname ha informado de que están inscritos en dicha asociación 145 abogados.

B. Respuestas a las principales preocupaciones y recomendaciones formuladas por el Comité durante el examen de anteriores informes

Marco institucional y jurídico (art. 2) (CCPR/CO/80/SUR, párrs. 7 y 8)

39. El Presidente de la Asamblea Nacional ha informado de que el parlamento recibió a examen recientemente —a principios de agosto de 2013— el proyecto de ley enmendado sobre el establecimiento del Tribunal Constitucional. Es la segunda vez en aproximadamente un decenio que el parlamento ha de estudiar y debatir un proyecto de ley sobre este tema⁹. El Estado desea una vez más poner de manifiesto que, en los casos definidos en los artículos 137 y 106 de la Constitución, el poder judicial es competente para examinar las impugnaciones de incompatibilidad de la legislación con la Constitución o con las disposiciones de cualquier convención en materia de derechos humanos. El objetivo del Gobierno de Suriname es garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en diferentes instrumentos internacionales y sancionar las violaciones de esos derechos.

40. Con respecto al enjuiciamiento de las personas que cometieron violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, Suriname comunica que el proceso comenzó

⁷ La Ley de Organización y Composición del Poder Judicial de Suriname fue enmendada el 31 de marzo de 2009. El número máximo de miembros del Alto Tribunal de Justicia pasó de 15 a 40.

⁸ Este curso recibe en holandés el nombre de RAIO (*Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding*).

⁹ Radio-Suriname, www.radiosonline.nl/wetsvoorstel-constitutioneel-hof-bij-parlement/, 1 de agosto de 2013.

con el juicio de los sospechosos en la causa denominada Asesinatos del 8 de Diciembre. Este megajuicio sigue en marcha y se encuentra en una etapa avanzada.

41. La Asamblea Nacional aprobó una ley de enmienda de la Ley de 19 de agosto de 1992 sobre la amnistía de las personas que, desde el 1 de enero de 1985 hasta la fecha de promulgación de esta ley, hubieran cometido ciertos delitos que en ella se definían (Ley de Amnistía 1989, SB1992 N° 68, en su forma enmendada publicada en el SB 2012 N° 49). Según el memorando explicativo de esta Ley de Amnistía, podían acogerse también a la amnistía los miembros del Ejército Nacional que hubieran sido declarados culpables de los delitos definidos en su texto. El memorando explicativo también subrayaba que la sentencia Moiwana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no entraba en el ámbito de la Ley de Amnistía y que por lo tanto debía cumplirse en su totalidad. El artículo 2 de dicha ley dice lo siguiente: "1. Sin embargo, la amnistía contemplada en el artículo 1 no se aplicará a los delitos que deban considerarse crímenes de lesa humanidad. 2. La expresión 'crímenes de lesa humanidad' que se emplea en el párrafo 1 se refiere a los delitos tipificados como tales por el derecho internacional aplicable". Además, cabe notar que, de conformidad con el Código Penal de Suriname, el derecho a enjuiciar estos casos no se ve impedido por prescripción alguna (art. 96).

42. Mientras las actuaciones del caso del 8 de diciembre de 1982 se encontraban en la etapa de requerimiento, el 11 de mayo de 2012 se pronunció un fallo (intermedio) con carácter de sentencia firme provisional. El enjuiciamiento quedó suspendido hasta que el Tribunal Constitucional dictaminara si la adopción de la Ley de Amnistía constituía o no una violación del artículo 131.3 de la Constitución (*fuentes*: servicio del ministerio público). Este artículo estipula que "queda prohibida toda injerencia en la instrucción o encausamiento y en las causas pendientes ante los tribunales". En cuanto al fondo de la cuestión, la Corte Marcial no llegó a emitir dictamen sobre si la Ley de Amnistía violaba la Constitución.

43. El martes 13 de agosto de 2013 la Corte Marcial declaró inadmisile la petición de uno de los sospechosos en el caso del 8 de diciembre de 1982 de que se anulara el procedimiento. Su abogado explicó en los medios de comunicación que, de conformidad con el artículo 28 del Código de Procedimiento Penal, su cliente tenía derecho a pedir a la Corte Marcial que anulara el procedimiento penal en su contra. Anteriormente, el mismo letrado había presentado una petición en nombre de otros tres sospechosos para que no prosperara dicho procedimiento. Esta petición también fue rechazada por la Corte Marcial. Cuando fue entrevistado por un periódico, el abogado explicó que el fallo provisional suscitaba en sus clientes la incertidumbre de si las actuaciones penales en su contra continuarían, y de qué manera. Debido a esta incertidumbre, sus clientes solicitaron a la Corte que considerase cerrado el caso. Este letrado y los clientes que representaba sostenían que la fiscalía y la Corte Marcial no tuvieron en cuenta la Ley de Amnistía promulgada democráticamente (*fuentes*: Oficina Legislativa del Ministerio de Justicia y Policía y *Times of Suriname* en línea – Press Display.com, jueves 15 de agosto de 2013). Las decisiones de la Corte que sobrevinieron constituyen pruebas adicionales de que las actuaciones penales contra los sospechosos en el caso del 8 de diciembre de 1982 no han quedado sin efecto. También demuestran que dicho tribunal opera de manera justa, independiente e imparcial, incluso cuando están en juego los intereses del Gobierno. Cabe observar que el proyecto de ley relativo al Tribunal Constitucional está pendiente ante la Asamblea Nacional.

44. Como se expuso en anteriores informes, la instrucción y procesamiento de las megacausas relativas a delitos cometidos durante el régimen militar exigen pericia y tiempo. Las víctimas de la causa Moiwana y sus familiares fueron indemnizados de conformidad con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo ha ocurrido en los casos *Gangaram Panday* y *Aloeboetoe*.

45. Debido a que muchos de los familiares de las víctimas del caso *Moiwana* viven en la Guyana Francesa y también a una falta de testigos creíbles para un encausamiento penal que deseen dar testimonio, la instrucción penal todavía no ha llegado a la etapa de identificación de los sospechosos. Aunque el Sr. Andre Ajintoena, representante de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes del caso *Moiwana*, ha declarado públicamente que hay testigos dispuestos a dar testimonio, ninguno se ha presentado aún a la policía con el fin de proporcionar detalles y formular declaraciones. Lo mismo ocurre en el caso de otras violaciones de los derechos humanos producidas durante el régimen militar. El Código de Procedimiento Penal establece claras garantías de imparcialidad en los juicios, y el Estado debe acatar esas normas. Los testigos en las actuaciones penales no corren ningún peligro. Esto puede apreciarse en el procedimiento del caso del 8 de diciembre de 1982, en el que los testigos nunca han afrontado ningún tipo de intimidación ni de amenaza a su vida o su libertad. También resulta evidente en las numerosas y periódicas apariciones públicas de los representantes de supuestas víctimas de violaciones de derechos, en las cuales expresan libremente sus alegaciones contra los supuestos culpables sin sufrir ningún tipo de amenaza.

46. Con respecto a las comunicaciones del Comité Nos. 146/1983 y 148 a 154/1983 (*Baboeram et al. c. Suriname*), cabe afirmar que el derecho a la vida está debidamente protegido en Suriname: i) el Código Penal establece que dar muerte deliberadamente a otra persona es punible en función de diversos delitos. La pena de muerte todavía figura en el Código Penal y en el Código Penal Militar. Sin embargo, la última vez que una persona fue condenada a la pena de muerte fue en 1927 (Nicodemus Charles Apatoe). En el proyecto de nuevo Código Penal, la pena de muerte ya no figura entre las sanciones. Este proyecto está a consideración para su aprobación por el órgano legislativo supremo de Suriname, la Asamblea Nacional. ii) La instrucción penal de los asesinatos de diciembre de 1982 ya se ha completado y iii) continúa el enjuiciamiento de los sospechosos de la muerte de las víctimas en dicho caso. iv) La legislación de Suriname, tanto en el Código de Procedimiento Penal (arts. 316 y ss.) como en el Código Civil (arts. 1386 y ss.), permite a los familiares supervivientes pedir indemnización. De acuerdo con el procedimiento penal, los familiares supervivientes deben participar en las actuaciones para obtener indemnización, que se otorga solo por los daños y perjuicios financieros sufridos hasta la cantidad máxima fijada por la ley; la decisión relativa a la indemnización figura en la sentencia de las actuaciones penales. No obstante, en el procedimiento civil la parte damnificada tiene la oportunidad de pedir indemnización por los daños y perjuicios totales realmente sufridos. En la segunda opción, es decir el procedimiento civil, la decisión pertinente normalmente tiene lugar después de que el acusado haya sido declarado culpable en el juicio penal. Una vez concedida la indemnización por daños y perjuicios en el juicio penal, no puede ulteriormente pretenderse indemnización en actuaciones civiles. Del mismo modo, cuando se han reclamados daños y perjuicios en el procedimiento civil no puede pedirse indemnización en un procedimiento penal. En las actuaciones penales sobre el caso del 8 de diciembre de 1982, los familiares más próximos no han presentado pretensión de indemnización y tampoco lo han hecho ante un tribunal civil.

Aplicación del artículo 23 de la Constitución de conformidad con el artículo 4 del Pacto (CCPR/CO/80/SUR, párr. 9)

47. Los derechos civiles y políticos del individuo están reconocidos principalmente por la Constitución de la República de Suriname, que fue aprobada en 1987 mediante referendo público. La Ley de Enmienda de la Constitución de la República de Suriname, de 8 de abril de 1992, introdujo algunas enmiendas en su texto¹⁰. El compromiso asumido por Suriname con respecto al disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en una

¹⁰ Véase el Anexo 1, que contiene la traducción al inglés del texto actualmente en vigor.

sociedad democrática se pone de manifiesto en el preámbulo de la Constitución, donde dice: "Convencidos de nuestro deber de respetar y garantizar los principios de libertad, igualdad y democracia así como los derechos y libertades fundamentales de la persona...". En los artículos 105 y 106¹¹ se aprecia que la Constitución hace efectivos los derechos reconocidos en el Pacto. El artículo 23 de la Constitución está redactado como sigue: "En caso de guerra, peligro de guerra, estado de sitio o estado de emergencia, o por razones de seguridad del Estado o de orden público y moral, los derechos mencionados en la Constitución podrán someterse a las limitaciones que fije la ley, que regirán durante un período determinado en función de las circunstancias y de conformidad con las normas internacionales aplicables al respecto". Esto significa que los derechos humanos pertinentes, que están garantizados en el Pacto, no son dejados de lado a menos que se produzcan las situaciones mencionadas en el artículo 4 del Pacto. El significado de la emergencia pública referida en dicho artículo corresponde a la situación que contempla el artículo 23 de la Constitución de la República de Suriname. La situación de guerra, peligro de guerra, estado de sitio o estado de emergencia o la existencia de razones de seguridad del Estado o de orden público y moral se consideran "un peligro para el bienestar de la nación y su existencia"¹² y justifican la suspensión (continua) de determinados derechos. No existe ninguna otra legislación nacional que detalle las modalidades que permiten el recurso al artículo 23 de la Constitución.

**La igualdad de género y el principio de no discriminación (arts. 3 y 26)
(CCPR/CO/80/SUR, párr. 20)**

48. En la Ley de Personal sigue habiendo disposiciones de carácter discriminatorio que no han sido enmendadas ni derogadas (arts. 15.1, 47.9 y 69.3). En estos artículos se establece, entre otras cosas, la posición de la mujer casada en la función pública. De hecho, estas disposiciones son "una masa de letra muerta" porque no son aplicadas. El artículo 45.4 ha sido enmendado por los Decretos presidenciales 1990 (SB 1990 N° 36) y 2003 (SB 2003 N° 77), que posibilitan mantener el goce de sueldo durante la licencia por maternidad. El Ministerio del Interior ha iniciado el proceso de modernización de toda la Ley de Personal, que se espera finalizará en 2013 (*fuentes*: Ministerio del Interior).

49. El Estado reconoce el carácter discriminatorio del Anexo I de la Ley de Identidad (SB 1976 N° 10). La Oficina Central de Asuntos Civiles (CBB)¹³ está preparando una propuesta para enmendar dicho anexo con el fin de que las mujeres casadas dejen de estar obligadas por ley a llevar también el apellido de su cónyuge. Las mujeres casadas podrán decidir libremente si llevarán también el apellido de su marido. En la actualidad, la instrucción relativa a los pasaportes (SB 2005, N° 2) puede considerarse una medida provisional.

50. El Estado también ha determinado que los artículos 3, 8.3 y 8.6, 10, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Nacionalidad y Residencia tienen carácter discriminatorio. El Ministerio de Justicia y Policía ha elaborado un proyecto de revisión de dicha ley, según informa el Ministerio del Interior. La revisión de esta ley está actualmente sometida a examen.

¹¹ El artículo 105 estipula que las disposiciones de los acuerdos con otros países y organizaciones internacionales que sean directamente vinculantes para alguna de las partes entrarán en vigor desde su promulgación, y el artículo 106 dice: "La normativa jurídica vigente en la República de Suriname no se aplicará si ello resultara incompatible con las disposiciones de acuerdos directamente vinculantes para alguna de las partes que hayan sido celebrados tanto antes como después de la promulgación de dicha normativa".

¹² Artículo 23 de la Constitución de la República de Suriname.

¹³ CBB son las iniciales de Centraal Bureau Burgerzaken (Oficina Central de Asuntos Civiles).

51. Para eliminar su efecto discriminatorio, el Estado enmendó los artículos 15.2, 41, 47 y 73.1 de la Ley Electoral de 1987 (ley relativa a las elecciones). La enmienda fue aprobada en 2005 y se refiere a la inscripción de las candidatas casadas en las papeletas con sus apellidos de solteras, así como a la inscripción de las votantes casadas en los padrones con sus apellidos de solteras. Las mujeres casadas que prefieren aparecer a la vez con sus apellidos de solteras y los apellidos de sus maridos (fallecidos) tienen que solicitarlo. Estas nuevas normas se aplicaron por primera vez en las elecciones generales de 2010. Cabe mencionar que 1.693 mujeres, entre las cuales 1.360 eran casadas y 297 viudas, no se opusieron a la aplicación de estas normas legales a sus casos personales. Antes de la enmienda las mujeres casadas, tanto candidatas como votantes, estaban obligadas por ley a figurar con los apellidos de sus maridos vivos o fallecidos.

52. Se ha presentado al Consejo de Estado un proyecto de enmienda del Código Penal que contiene disposiciones que tipifican como delito la discriminación por motivos de género (*fuentes*: Ministerio del Interior).

El derecho a la vida y la prevención de la tortura (arts. 6 y 7) (CCPR/CO/80/SUR, párrs. 7, 8, 10, 11 y 12) (CCPR/C/95/2, pág. 7, párr. 11)

53. La pena de muerte no ha sido abolida en Suriname. Sigue figurando en el artículo 9 del Código Penal, y el artículo 349 de dicho código establece que: "El que intencionalmente y con premeditación quitare la vida a otro será culpable de asesinato punible con la pena de muerte o con prisión perpetua" (la prisión perpetua es de un máximo de 20 años en Suriname). La pena de muerte también se contempla en el artículo 6a del Código Militar, que establece la normativa del derecho militar. La Corte Marcial solo puede aplicar la pena de muerte mediante decisión unánime. Ello está estipulado en el artículo 9 del Código Militar: "Cuando se haya declarado culpable al acusado de un delito que conlleva la pena de muerte, la condena no podrá ejecutarse hasta que se haya alcanzado una decisión unánime". En virtud del artículo 10 del Código Penal de Suriname, el modo de ejecución de la pena de muerte es el siguiente: el verdugo ejecuta la pena de muerte en un patíbulo mediante un nudo corredizo colocado alrededor del cuello de la persona condenada y sujeto al patíbulo; se abre entonces una trampa bajo los pies del condenado. Si la pena de muerte se impone en virtud del Código Militar, puede entonces ejecutarse mediante fusilamiento: "La pena de muerte se ejecuta mediante fusilamiento. Una resolución del Estado establece otras normas a este respecto" (art. 7 del Código Militar).

54. El Presidente de la República de Suriname puede indultar a un condenado a muerte, en cuyo caso la condena se conmuta por la de prisión perpetua. El artículo 29 del Código Penal establece que si esa persona ha cumplido por lo menos dos tercios y nueve meses de su condena se le dispensará del cumplimiento del resto de la condena. En el proyecto de revisión del Código Penal se deroga la pena de muerte. Este proyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y considerado por el Consejo Consultivo, y ahora requiere la aprobación de la Asamblea Nacional como órgano legislativo. No se ha iniciado ninguna actuación similar con respecto al Código Militar.

55. Debe observarse que siguen vigentes las opiniones expuestas por el representante del Estado durante las sesiones en que se examinó el informe inicial (párr. 298, *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo quinto período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/35/40)*). En debates públicos más recientes sobre este tema, algunos miembros del parlamento, otros políticos de alto perfil y los ciudadanos en general han expresado su desacuerdo en abolir la pena de muerte, que consideran disuasoria. En virtud de la ley, esta pena solo puede ser impuesta por los delitos de asesinato, homicidio en primer grado y piratería.

56. El 11 de diciembre de 1987 la República de Suriname pasó a ser parte en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que es un instrumento

regional. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no ha tomado ninguna iniciativa concreta para convertirse en parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que es un instrumento internacional de las Naciones Unidas.

57. Del mismo modo que a otros ciudadanos que cometen violaciones de los derechos humanos, a los miembros de las Fuerzas Armadas también se los enjuicia cuando se presentan alegaciones de dichas violaciones. En los últimos diez años han sido declarados culpables varios agentes de policía y soldados que cometieron asesinatos, homicidios, robos y otras conculcaciones de los derechos humanos. A continuación se expone una sinopsis del número de agentes de policía que fueron arrestados o sometidos a detención policial entre 2003 y julio de 2013 debido a la supuesta comisión de delitos violentos y delitos castigados con pena capital mientras cumplían sus funciones.

<i>Año</i>	<i>Delitos violentos</i>	<i>Delitos castigados con pena capital</i>
2003	Detenciones: 9 Detenciones policiales: 4	Ninguno
2004	Detenciones: 9 Detenciones policiales: 6	Ninguno
2005	Detenciones: 8 Detenciones policiales: 1	Ninguno
2006	Detenciones: 9 Detenciones policiales: 6	Detenciones: 1 Detenciones policiales: 1
2007	Detenciones: 13 Detenciones policiales: 7	Ninguno
2008	Detenciones: 5 Detenciones policiales: 3	Detenciones: 3 Detenciones policiales: 3
2009	Detenciones: 5 Detenciones policiales: 1	Detenciones: 1 Detenciones policiales: 1
2010	Detenciones: 14 Detenciones policiales: 10	Ninguno
2011	Detenciones: 12 Detenciones policiales: 3	Ninguno
2012	Detenciones: 27 Detenciones policiales: 10	Detenciones: 2 Detenciones policiales: 2
2013, hasta agosto	Detenciones: 17 Detenciones policiales: 7	Ninguno

Fuente: Departamento de Investigación del Personal (OPZ) del Cuerpo de Policía de Suriname.

Nota: La detención precede a la detención policial.

58. Durante la instrucción y las actuaciones ante el Tribunal Penal, no se hace ninguna distinción por motivos personales o de raza, religión o posición social, y durante el enjuiciamiento se observa el principio de igualdad. Esto también rige para los funcionarios que deben tratar con los reclusos, tales como agentes de policía, agentes penitenciarios y miembros de la policía militar.

59. Los abusos sexuales de los detenidos, así como la homosexualidad, siguen siendo un tabú y a menudo estos casos no son denunciados. Si se formula una denuncia o si llega a conocimiento de los agentes penitenciarios uno de estos casos, la policía interviene inmediatamente, se lleva a cabo una investigación penal y los servicios sociales prestan el apoyo sanitario y terapéutico necesario a la víctima.

60. Los detenidos tienen derecho al tratamiento médico. Con respecto al VIH, después de una consulta con el médico de la prisión se lleva a cabo un reconocimiento físico, al igual que cuando los síntomas de un detenido hacen sospechar de la presencia del virus. En cuanto a la tuberculosis, existe este año un programa para examinar a todos los detenidos, que continuará en los próximos años. Los casos sospechosos serán aislados, y esos detenidos serán trasladados a otros lugares (prisiones o centros médicos) para recibir tratamiento. Los agentes penitenciarios no están capacitados para tratar con los enfermos mentales detenidos. Para estos casos se contratará a un psiquiatra profesional, dado que ha terminado el contrato con el anterior psiquiatra (*fuentes*: Ministerio de Justicia y Policía, Jefe del Departamento de Cuidado del Delincuente).

Lucha contra la violencia doméstica

61. La ley relativa a la protección contra la violencia doméstica fue aprobada el 20 de julio de 2009 (Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica, publicada en el *Boletín Oficial* SB 2009 N° 84). Esta ley es igual para ambos géneros y por lo tanto protege tanto a las mujeres como a los hombres. Además protege a los niños, los padres, los abuelos, los familiares y los miembros más débiles y vulnerables del hogar. En virtud de esta ley, en situaciones de violencia doméstica se puede pedir una orden de protección. Para atender la necesidad de una pronta protección, esta ley da derecho al peticionario a una decisión judicial dentro de los dos meses contados a partir de la presentación de la petición, independientemente de la emisión de una orden de protección. Para superar el período de dos meses, la ley prevé que en caso necesario el tribunal expida un mandamiento interino. Al recibir un pedido de orden de protección, el tribunal puede emitir un mandamiento provisional en cualquier momento, incluso antes del comienzo de las vistas. La orden de protección incluye diversas cláusulas de prohibiciones y obligaciones, entre las cuales ciertas disposiciones obligatorias son provisionales. Dicha orden se basa en el derecho civil. El incumplimiento de ciertas órdenes o prohibiciones establecidas por el tribunal conlleva el riesgo de recibir una pena de privación de libertad, una multa o ambas. El procedimiento relativo a la orden de protección no excluye el enjuiciamiento penal en caso de que los actos de violencia doméstica constituyan también un delito. Las actuaciones del tribunal penal y el procedimiento del tribunal civil relativo a la orden de protección pueden llevarse a cabo simultáneamente. También puede solicitarse una orden de protección en caso de violación conyugal. Además de dar respuesta jurídica a la violencia doméstica se han realizado talleres y campañas de concienciación en los medios de comunicación bajo la dirección del Ministerio de Justicia y Policía y de varias ONG (*fuentes*: Ministerio de Justicia y Policía/Oficina de Política de la Mujer y el Niño).

62. En el período transcurrido se han promulgado varias leyes, entre ellas: a) la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica (SB 2009 N° 84). Esta ley tiene como objetivo brindar protección en una etapa temprana por medio de un procedimiento de respuesta rápida a las víctimas de violencia doméstica; b) la revisión del Código Penal con respecto a los delitos de abusos deshonestos (contra la moral) (SB 2009 N° 34). En esta revisión, entre otras cosas se han tipificado como delitos la violación en el matrimonio y la violación de hombres; c) la Ley contra el Acoso (SB 2012 N° 70).

**Prohibición de la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud (art. 8)
(CCPR/CO/80/SUR, párr. 13)**

63. Las disposiciones relativas a la trata de mujeres y de niños varones han sido enmendadas e/o incluidas en el Código Penal. Estas enmiendas han entrado en vigor en abril de 2006 (SB 2006 N° 42) y en virtud de ellas ambos sexos están protegidos contra la trata de personas. Las enmiendas se ajustan a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Hasta la fecha, Suriname cuenta con la siguiente legislación en relación con la trata de personas: la Constitución, que en su artículo 9 prohíbe la esclavitud y en su artículo 15 prohíbe el trabajo forzoso; el Código Penal, que en su artículo 307 prohíbe y sanciona la trata de personas y en su artículo 249 se refiere a la devolución ilegal a Suriname, mientras que el artículo 249a se ocupa del tráfico ilícito, el artículo 284 versa sobre la falsificación de documentos de viaje y el artículo 188 hace referencia a las organizaciones delictivas.

64. Los delitos de abusos deshonestos están tipificados actualmente de manera neutra en cuanto al género, con el fin de proteger a hombres y mujeres, y de forma compatible con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos conexos, en particular el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y con el Convenio sobre la Delincuencia Cibernética. La legislación prohíbe todas las formas de trata de personas. El Código Penal prohíbe específicamente la trata de personas con fines sexuales o de otro tipo. La legislación abarca las formas internas y transfronterizas de dicha trata. Las penas máximas por la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral tales como el trabajo forzoso u obligatorio y la servidumbre varían de 8 a 20 años de privación de la libertad. La Fiscalía General puede pedir sanciones penales dobles contra un tratante por el acto de la trata y por la violación de la víctima. El Gobierno brinda servicios jurídicos gratuitos a las víctimas de la trata, que también tienen la opción de pedir refugio.

65. No se dispone de estadísticas sobre la trata de personas con anterioridad a 2009. En ese año, la Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas fue separada del Departamento de Asuntos de la Juventud del Cuerpo de Policía de Suriname. Se detectó, investigó y resolvió el caso *Curaçao* de trata y tráfico ilícito de personas. La organización delictiva culpable de esas actividades fue expuesta y desmantelada por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Dicha organización estaba integrada por nacionales de Suriname y de otros países. En 2010 se investigaron 12 casos de trata de seres humanos. La Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas participó en actividades de control de prostíbulos, en especial la observación y el allanamiento de prostíbulos, la recopilación de información y su estudio conjuntamente con otros departamentos, y la realización de programas de concienciación en varias escuelas en colaboración con el Departamento de Asuntos de la Juventud. No se han llevado otras estadísticas ni registros sobre los casos de trata de personas. En 2011 comenzó a configurarse una actividad al respecto. Sobre la base de información confidencial, se han investigado alegaciones de trata de seres humanos y se han llevado a cabo numerosos controles. Entre 2012 y 2013 se han registrado siete casos¹⁴.

66. Desde 2003 existe en el Ministerio de Justicia y Policía un Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas. La tarea principal del grupo de trabajo es coordinar las actividades en la materia entre los diversos organismos, evaluar los progresos alcanzados y coordinar nuevas actividades. Una de las tareas específicas de este grupo es estudiar las características

¹⁴ Véase el Anexo 2, que contiene información y estadísticas de la Dependencia de lucha contra la Trata de Personas del Cuerpo de Policía de Suriname y detalles y estadísticas sobre los casos de trata de personas proporcionados por el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas.

y aspectos de la trata de personas, informar al respecto y formular estrategias en aras de una respuesta nacional eficaz y sostenible. Otras funciones concretas consisten en brindar asesoramiento y coordinación para la planificación, preparación y ejecución de las actividades gubernamentales encaminadas a combatir la trata de seres humanos en su sentido más amplio. Las tareas de coordinación incluyen en particular el seguimiento y evaluación del plan estratégico nacional, así como las campañas de concienciación por televisión y en escuelas y talleres. El grupo de trabajo mantiene buenas relaciones funcionales con organizaciones internacionales, en particular con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

67. Las cifras de los casos de trata de seres humanos examinados en los últimos tres años demuestran que la Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas del Cuerpo de Policía y la Fiscalía llevan a cabo enérgicamente una política de investigación y enjuiciamiento. Todos los casos en que se sospecha la existencia de trata de personas son objeto de una investigación penal, y los sospechosos son enjuiciados y finalmente condenados. La Fiscalía también cuenta con una Dependencia de Trata de Personas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley colaboran con sus colegas de Guyana, Trinidad y Tabago y la República Dominicana y han procurado mejorar los mecanismos de cooperación con Colombia y la Guyana Francesa. Un ejemplo de cooperación internacional en la materia es la que Suriname solicitó a Trinidad y Tabago y Curaçao para investigar el caso de 23 personas que supuestamente habían sido enviadas a Trinidad y Tabago para realizar trabajos forzados. El Gobierno de Curaçao cooperó mediante la extradición a Suriname de cuatro sospechosos, que fueron detenidos en relación con este caso. En otros casos, Suriname ha colaborado eficazmente con Guyana.

68. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han sido capacitados para reconocer las características de la trata de personas y para detectar a sus víctimas. Se brinda una variada formación a funcionarios administrativos de los distritos fronterizos, servicios de detectives, servicios exteriores, miembros de la Policía Militar (inmigración), funcionarios aduaneros, inspectores del trabajo, trabajadores sociales, jóvenes parlamentarios, periodistas, funcionarios del Departamento de Inmigración del Ministerio de Justicia y Policía y otros agentes que puedan entrar en contacto con las víctimas. Además de la formación especializada dirigida a los distritos fronterizos, se imparte capacitación a miembros del ministerio público y de la judicatura. Próximamente —en el segundo semestre de 2013— tendrá lugar un taller sobre la trata de personas y la presentación de un proyecto de política sobre el tema a cargo del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas. Se realizan diversos programas y actividades de sensibilización, como películas informativas, programas de televisión y proyectos escolares. Las personas que trabajan en la esfera de la lucha contra la trata de seres humanos también participan en cursos y programas de capacitación en el exterior (Bahamas, Sudáfrica, El Salvador y Estados Unidos de América). La Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas del Cuerpo de Policía de Suriname coopera estrechamente con la dependencia análoga del ministerio público en la investigación de los casos sospechosos. También trabaja en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas.

69. Con respecto a la respuesta jurídica a las víctimas extranjeras de la trata de personas en Suriname, se está elaborando una normativa para conceder el permiso de residencia temporal a esta categoría específica de extranjeros. Después de su evaluación, este proyecto de normativa será examinado y presentado para su aprobación al Ministro de Justicia y Policía. No se expulsa a las víctimas en situación irregular y, de ser necesario y en cooperación con algunas ONG, se brinda asistencia a las víctimas, por ejemplo en forma de refugio. En todo momento las víctimas pueden optar por regresar a sus países de origen.

Trato dado a los reclusos y otros detenidos, libertad y seguridad de la persona y derecho a un juicio con las debidas garantías (arts. 9, 10 y 14) (CCPR/CO/80/SUR, párrs. 14, 15, 16 y 17) (CCPR/C/95/2, pág. 7, párr. 14)

Legislación

70. El artículo 132 de la Constitución estipula que: "El derecho civil, el derecho comercial, el derecho penal civil y militar y el derecho procesal se ajustarán a las disposiciones legales establecidas en los códigos respectivos, sin perjuicio de la potestad conferida a la legislatura para regular cuestiones específicas mediante la adopción de leyes por separado".

71. En las instituciones de detención, el trato de las personas privadas de libertad se rige por la legislación sobre prisiones, que entre otras cosas fija las directrices para el trato de los reclusos. La ley de Suriname prohíbe alojar a los presos preventivos junto a los ya condenados. El Código de Procedimiento Penal establece normas sobre el trato de esos reclusos y de los detenidos para su expulsión, con el fin de proteger sus derechos.

72. Con el fin de mejorar las condiciones penitenciarias, en especial en lo relativo al hacinamiento y el saneamiento, se inauguró el 8 de diciembre de 2008 el Nuevo Establecimiento Carcelario, con capacidad para 350 reclusos. En él nunca se excede la capacidad máxima. Asimismo, se han renovado las instalaciones de detención en diversas comisarías de policía (Kwatta, Nieuwe Haven, Nieuwe Grond, Uitvlucht, Leiding y varias otras en el distrito Nickerie). Se renovarán todas las instalaciones policiales de detención que lo necesiten.

73. El trato de los reclusos y otros detenidos se ajusta a la legislación penitenciaria y las normas internas de los establecimientos. Como es normal, y de conformidad con la legislación y las normas mencionadas, la libertad de los detenidos está restringida. La reclusión bajo llave tiene lugar desde las 18.00 hasta las 6.00 horas. Desde las 6.00 hasta las 18.00 horas, los reclusos tienen libertad de circulación y participan en el proceso de terapia laboral, o sea que realizan todo tipo de actividades aprobadas por la dirección, por las cuales reciben una paga. También se desarrollan cursos de alfabetización y de computación, y en breve comenzarán otros dos cursos. La capacidad máxima de la Institución Penitenciaria Duisburg (IPD) es de 228 reclusos y se procura no excederla. Actualmente hay allí 223 reclusos, de los cuales 194 están en situación de prisión firme y 8 están en situación de prisión preventiva, en tanto que otros 21 tienen en curso una apelación. La capacidad máxima de la Institución Penitenciaria Hazard (IPH) es de 100 reclusos y fue excedida solo una vez en el pasado. En la actualidad alberga a 86 reclusos, de los cuales 81 están en situación de prisión firme y 5 tienen pendiente una apelación. La capacidad máxima del Establecimiento Carcelario (EC) es de 350 reclusos y nunca se excede. Actualmente se encuentran allí 344 reclusos, de los cuales 154 están en situación de prisión firme, 147 en situación de prisión preventiva y 43 tienen pendiente una apelación (*fuentes*: Ministerio de Justicia y Policía). Las estadísticas relativas a las personas privadas de libertad en aplicación del Código Penal figuran en el Anexo 3¹⁵.

74. Las condiciones de vida de los reclusos en los establecimientos son razonables:

- En la IPD y en la IPH hay tres o menos reclusos por celda, y cada uno tiene su propia cama. En el EC hay seis o menos reclusos por celda, y cada uno también tiene su propia cama.

¹⁵ Véase el Anexo 3, Listas anuales de reclusos de 2003 a 2012, publicadas por la Oficina General de Estadística de Suriname.

- Alimentación variada. La carne o el pescado se combinan con verduras. La IPD y la IPH tienen sus propias cocinas, en las que la comida es preparada por agentes penitenciarios y reclusos, mientras que en el EC se trae de afuera. La calidad de la comida es buena.
- Razonable servicio médico (gratuito) para todos los reclusos. Actualmente se lleva a cabo un programa de prevención de la tuberculosis, en el cual se examinará (gratuitamente) a todos los reclusos.
- Razonable higiene en las prisiones.
- Oportunidades de rehabilitación (deportes) y cursos (computación).

75. En el sistema jurídico civil de Suriname no existe la institución de la fianza¹⁶. En el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal figuran los casos y los motivos por los que puede ordenarse la detención policial. El párrafo 1 estipula que "solo podrá emitirse legítimamente una orden de detención policial en caso en que existan sospechas graves contra una persona y en circunstancias que manifiesten el peligro de fuga, o debido a la existencia de razones fundadas de seguridad de la sociedad". El párrafo 2 de dicho artículo indica en qué casos no corresponde la detención policial, a saber: "en caso de que no sea probable una condena de privación de libertad ni una medida cautelar, o si debido a la ejecución de un posible mandamiento la persona condenada sería privada de su libertad por un período que excedería la duración de la pena". El párrafo 3a. establece que el mandamiento puede emitirse "en caso de delito punible por ley con pena de privación de libertad, si el sospechoso no tiene lugar de residencia permanente en el país". Además, el párrafo 3b estipula que el mandamiento puede expedirse "en caso de un delito punible por ley con pena de privación de libertad de cuatro años o más..." o en el caso de los delitos que figuran enumerados exhaustivamente en el párrafo 3b.

76. Sin embargo, la política de enjuiciamiento del ministerio público procura hacer un uso mínimo de la detención policial y de la prisión preventiva. Por lo tanto, antes de ordenar la detención policial, los agentes de investigación deben consultar en cada caso a los fiscales. Las directrices internas de la Fiscalía sobre la detención policial y la prisión preventiva se ajustan a la legislación, como se ha descrito en el párrafo 73. Asimismo, se abrevia en todo lo posible la prisión preventiva. En las vistas penales, el juez puede en determinadas circunstancias suspender la prisión preventiva, como por ejemplo en caso de un rápido examen de las vistas y de la ausencia de riesgo de reincidir en el delito, o basado en un mandamiento de obligación de notificar dirigido al ministerio público de conformidad con el artículo 70 (1) del Código de Procedimiento Penal.

77. Las estadísticas actualizadas sobre la población carcelaria y el porcentaje de los condenados y de las personas que aguardan su enjuiciamiento figuran anejas al presente informe¹⁷.

78. La primera sección del título IV del Código de Procedimiento Penal de Suriname, "Medidas coercitivas especiales", establece normas aplicables al arresto y la detención de sospechosos. Estas normas bastan para garantizar los derechos de los sospechosos, ya que entre otras cosas minimizan el riesgo de que esos derechos sean violados. Estos aspectos del sistema penal se observan y evalúan constantemente con el fin de detectar la necesidad de reformas legislativas para seguir protegiendo, en consonancia con las normas internacionales, los derechos humanos de las personas detenidas.

79. Suriname adecuó su legislación al artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Lo hizo recientemente al promulgar la Ley de Enmienda del Código de Procedimiento Penal de

¹⁶ Así está establecido en el artículo 70 (1) (2) del Código de Procedimiento Penal.

¹⁷ Véase el Anexo 3, Estadísticas sobre la población carcelaria.

Suriname, de 20 de febrero de 2008 (SB 2008 N° 21). El mandamiento de detención policial tiene un efecto limitado a siete días (art. 49 (2)). En casos excepcionales el fiscal puede extenderlo hasta 30 días (art. 50 (1)). En virtud del artículo 53, después del arresto de un sospechoso debe adoptarse en el plazo de seis horas la decisión de si el arresto será seguido de detención policial. El artículo 54a da al sospechoso, inmediatamente después de su ingreso en detención policial, la oportunidad de impugnar ante un juez el mandamiento de detención policial. La persona que se encuentre en detención policial debe ser oída inmediatamente por el juez de instrucción. El artículo 54a (1) es complementado, entre otras, por la norma de instrucción de que el sospechoso debe ser llevado ante el juez de instrucción dentro de los siete días desde su arresto, para que se examine la licitud de la detención policial. Actualmente, el período de 44 días que transcurría antes de que el detenido fuera llevado por primera vez ante un juez ha quedado reducido a 7 días. El mandamiento de detención policial se expedirá, de conformidad con el artículo 49 (1) del Código de Procedimiento Penal, en el caso de delitos con respecto a los cuales se permite tal detención.

80. La Ley de Organización y Composición del Poder Judicial de Suriname fue enmendada el 31 de marzo de 2009. El número máximo de miembros del Alto Tribunal de Justicia de Suriname pasó de 15 a 40 (*Boletín Oficial* de la República de Suriname 2009, N° 3). En la práctica, la escasez de jueces y fiscales causaba que se excediera el plazo razonable en los procedimientos penales según las normas internacionales de derechos humanos. Este atraso se está eliminando lentamente gracias al nombramiento de más jueces y fiscales. Con este fin, ha comenzado a dictarse el curso *Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding* (RAIO, curso de formación para funcionarios judiciales). Los integrantes del primer grupo de graduados han sido nombrado miembros del poder judicial de conformidad con la Ley de Organización y Composición del Poder Judicial de Suriname.

Incomunicación

81. En principio, se garantiza a los detenidos el contacto sin restricciones con el abogado de su elección. El abogado tiene libre acceso al detenido (art. 40 (1) del Código de Procedimiento Penal). El abogado puede tratar cuestiones de fondo y de procedimiento vinculadas con el caso. El detenido y su abogado pueden intercambiar cartas sin tener que revelar el contenido a otras personas. En la práctica, el contacto entre el detenido y su abogado se rige también por las normas internas del establecimiento carcelario. En este contexto se requiere que tanto el detenido como su letrado cooperen en eventuales interrogatorios.

82. En el período transcurrido entre la presentación del segundo informe periódico y agosto de 2013 no se registraron casos de detenidos incomunicados. No se conoció ningún caso de sospechosos en detención policial en los que sus familias no hayan sido informadas ni en los que se les haya negado todo contacto con el mundo exterior (por ejemplo, un médico o la familia). El Código de Procedimiento Penal ofrece suficientes garantías contra la detención en condiciones de incomunicación.

83. El contacto entre el detenido y su abogado, que en principio es irrestricto, puede ser restringido o incluso negado temporalmente en aras de una investigación en marcha. El juez durante la instrucción, y el fiscal durante la investigación preliminar, pueden en cualquier momento negar o restringir toda forma de contacto entre el abogado y el detenido, con inclusión del intercambio de cartas u otros documentos. La orden pertinente debe explicar las circunstancias y motivos específicos en que se basa la decisión y establecer la duración de la restricción. Dicha restricción no puede establecerse por un período superior al necesario, justificado sobre la base de las circunstancias y motivos expuestos en la orden. En ningún caso la duración de la restricción puede superar un máximo de ocho días. En

interés de la investigación, deberá notificarse la orden respectiva sin demora y por escrito al abogado y el detenido (art. 40 (2) del Código de Procedimiento Penal).

84. El detenido y su abogado pueden interponer contra la orden una apelación ante el tribunal de justicia, que adoptará una decisión lo antes posible después de una citación por escrito (art. 40 (3) del Código de Procedimiento Penal).

85. Todas las denuncias que se presentan contra los agentes del orden público por malos tratos de personas en detención policial y otros detenidos son investigadas por el Departamento de Investigación del Personal (OPZ). Se trata de una dependencia especial dentro del sistema de aplicación de la ley. Todas las demás denuncias de malos tratos que no vayan dirigidas contra los agentes del orden público son investigadas por la policía excepto en los casos de detención militar, en que la investigación incumbe a la policía militar. En virtud del artículo 145 de la Constitución y del artículo 136 del Código de Procedimiento Penal, las investigaciones se llevan a cabo bajo la dirección del Fiscal General. En sus respectivos ámbitos, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil brindan a las víctimas de malos tratos los recursos jurídicos de completa reparación e indemnización contra los culpables y/o contra el Estado. Un curso sobre derechos humanos es un elemento básico del programa de formación de los agentes de la policía militar y los funcionarios penitenciarios.

86. Además de lo expuesto en el párrafo precedente, el Estado reitera su respuesta anterior, que figura en los párrafos 3, 5 y 6 del documento CCPR/C/SUR/CO/2/Add.1, puesto que sigue vigente en lo relativo a la cuestión de los malos tratos a las personas en detención policial y otros detenidos por parte de los agentes del orden público.

- (Párr. 3) La Oficina de Denuncias, que es una unidad del Ministerio de Justicia y Policía que depende directamente del ministro, está facultada para tratar las denuncias de malos tratos de detenidos por agentes de policía. Esta dependencia fue establecida en mayo de 2005 y funciona paralelamente al Departamento Central de Inspección de la policía, bajo la autoridad del Jefe de Policía. La Oficina de Denuncias está a cargo de vigilar que los agentes de policía cumplan su código de conducta. Ambas dependencias examinan las denuncias de mala conducta policial y también están facultadas para realizar investigaciones de oficio. Ambas coordinan estrechamente su actuación con la Fiscalía General cuando hay motivos para sospechar malos tratos de un detenido.
- (Párr. 5) En los casos en que las denuncias se refieren a actos punibles, el Fiscal General inicia inmediatamente el enjuiciamiento, y el tribunal penal impone las sanciones que corresponden. Ambos son instituciones independientes.
- (Párr. 6) En los casos de violación de la Carta de la Policía o de su código de conducta, el Ministro de Justicia y Policía o el Jefe de Policía, según sus respectivas competencias, adoptan las medidas disciplinarias pertinentes. La indemnización está sujeta a un fallo del tribunal civil. La formación en materia de derechos humanos ha sido incluida recientemente en la capacitación oficial del personal del orden público, y en la actualidad un fiscal se ocupa específicamente de las alegaciones de violación de los derechos humanos. Una estricta observancia de estas normas y prácticas servirá para reducir el número de casos de malos tratos debidos a la mala conducta de funcionarios policiales.

87. La Corte Marcial está integrada en primera instancia por un juez del Alto Tribunal de Justicia y dos oficiales militares. En las apelaciones, la Corte está compuesta por dos miembros del Alto Tribunal de Justicia y un oficial militar. Un miembro del Alto Tribunal de Justicia preside la Corte Marcial y tiene el voto decisivo. Esto demuestra la independencia de la Corte Marcial. Los oficiales son miembros de dicha corte debido a su

experiencia en cuestiones militares. Las sesiones de esta institución son públicas y accesibles a todos.

88. La jurisdicción de la Corte Marcial le permite ocuparse de casos penales cuando los sospechosos son efectivos militares de Suriname o ciudadanos particulares que eran efectivos militares de Suriname cuando cometieron el delito, y en los casos en que el principal sospechoso es un efectivo militar y uno o más de sus cómplices son ciudadanos particulares cuyos casos se fusionan con el del principal sospechoso militar. La competencia de la Corte Marcial abarca todos los delitos contemplados en la legislación penal general y en leyes especiales. La Corte Marcial de apelaciones también tiene potestad legal para examinar las decisiones de la autoridad penal interna de la organización militar.

89. La detención de niños de más de 10 años de edad por la comisión de delitos está justificada tanto de hecho como de derecho. La justificación jurídica de la detención está dada por la gravedad o la naturaleza del delito cometido, por ejemplo en casos de abusos deshonestos, robo, maltrato grave, homicidio y homicidio agravado. La justificación de hecho, que se añade a la jurídica, consiste por ejemplo en una situación desfavorable en el hogar o en una falta de supervisión adecuada. En la Fiscalía también existen directrices internas que estipulan que los niños de menos de 12 años no están sujetos a detención policial ni de otro tipo. Solo ocurrió una vez, en 2011, que como *ultimum remedium* un niño de 10 años que representaba un peligro para todo su entorno y para sí mismo fue detenido y enjuiciado. Este niño había atacado a su abuela y la había golpeado en la cabeza con un martillo. Era adicto a drogas duras y había agredido sexualmente a su hermana en repetidas ocasiones. La política de encarcelamiento con respecto a los niños se basa en general en la Convención sobre los Derechos del Niño. En Suriname, la práctica es que se los puede encarcelar a partir de los 12 años de edad. El proyecto de ley de enmienda del Código Penal aumenta la edad de responsabilidad penal de los 10 a los 12 años. Los niños de entre 10 y 12 años de edad son encarcelados solo cuando han cometido un acto punible muy grave o en caso de que ya no sea posible el cuidado del niño en el hogar y no existan otras alternativas.

90. Las condiciones materiales de los niños detenidos son buenas, al igual que los servicios que se les proporciona tales como la alimentación, la atención de la salud física y mental, la educación y el recreo. Se concede atención especial a su estado mental y su condición física. Los menores albergados en el centro correccional conocido como Opa Doeli reciben asesoramiento y orientación. También se les brinda enseñanza primaria. Los niños detenidos también pueden concurrir a la escuela fuera de la institución cuando deben cursar el primero o el segundo nivel de la educación secundaria general o cursos de enseñanza profesional como la educación técnica. Además, reciben asesoramiento del Servicio de Protección del Niño Judicializado (JKB). Practican deportes y otras actividades recreativas en Opa Doeli, lo cual ayuda a su rehabilitación. Asimismo, se organizan actividades religiosas dirigidas por clérigos de varias organizaciones religiosas de Suriname. Durante las vacaciones, los adolescentes que han tenido un buen desempeño en la escuela y mantenido buena conducta pueden pasar las vacaciones con sus familias en sus hogares, a menos que la situación del hogar no lo permita. También se brinda atención médica. Debido a que el número de detenidos es reducido, en Opa Doeli hay un profesional sanitario permanente a disposición de los adolescentes. También se proporciona atención sanitaria especializada a los detenidos fuera del establecimiento correccional, por ejemplo visitas al dentista. Los menores también tienen el apoyo de un trabajador social. De ser necesario, también pueden ver a un psicólogo y a un psiquiatra pediátrico. Además, todo adolescente que se encuentra en detención policial dispone de un asesor jurídico. En todos los casos en que se envían niños a Opa Doeli se logra una mejor rehabilitación que en el hogar.

91. El artículo 12 de la Ley de Encarcelamiento prohíbe explícitamente alojar conjuntamente a niños condenados con reclusos adultos. Asimismo, las autoridades no consideran que el alojamiento actual del centro correccional de niños delincuentes en el recinto del Establecimiento Penitenciario Central de Santo Boma (CPI) sea una situación ideal, aunque todas las instalaciones para los menores están completamente separadas de las que utilizan los adultos reclusos en el CPI. Este reconocimiento de que el actual establecimiento para menores no satisface todos los requisitos cuenta con la atención de las autoridades. Existe en la actualidad un establecimiento correccional de menores en construcción en la aldea de Santo Boma; las obras se encuentran en su etapa final. Este establecimiento ha de funcionar en estrecha colaboración con el Opa Doeli. Esta nueva institución está ubicada en el mismo distrito que el Establecimiento Penitenciario Central —Santo Boma—, pero no en el mismo terreno.

92. De conformidad con los artículos 16 y 40 del Código de Procedimiento Penal, a todo menor acusado de un delito se le asigna un letrado. Se utiliza una lista semanal de abogados, y el sistema funciona bien. El lugar de detención policial de los jóvenes es la comisaría de policía para menores. Los menores son enviados a la institución judicial estatal especializada, la llamada Jeugd Opvoedings Gesticht (Institución Educativa de Jóvenes).

93. Con respecto al artículo 24 (1) del Pacto, cabe decir que en los años anteriores a 2009 y en 2009 y 2010 el Ministerio de Justicia y Policía organizó sesiones de formación sobre los derechos del niño y sobre el principio del interés superior del niño destinadas a jueces, fiscales y abogados, con el objetivo de que las decisiones relativas al niño se adoptaran en su interés superior. También se ha impartido una formación complementaria en 2013¹⁸.

94. El período máximo de detención en espera del juicio es de 217 días. Esta norma está establecida en el Código de Procedimiento Penal. La detención policial se permite hasta un máximo de 7 días (art. 48), con la posibilidad de extenderse una vez por otros 30 días (arts. 51 y 55). Si después de los 37 días no se ha puesto en libertad al sospechoso o no se ha oído su caso en el tribunal, el fiscal pedirá al juez de supervisión que el sospechoso permanezca en prisión provisional por un período de 30 días. La prisión provisional puede extenderse tres veces por períodos de 30 días (arts. 56, 139 y 168). El número de días en detención llega así a los 157. Si se pide una instrucción judicial, la prisión provisional puede extenderse por otros 30 días (arts. 139, 168 y 169). Se llega así al plazo máximo de detención, o sea $157 + 60 = 217$ días. En la práctica, según las directrices internas de la Fiscalía General, los casos deben ser llevados ante el juez en la medida de lo posible dentro de los 30 días. En casos importantes en que se han cometido delitos muy graves que exigen una mayor investigación, esta norma puede obviarse.

Protección de los niños (art. 24) (CCPR/CO/80/SUR, párrs. 18 y 19)

95. Al adoptar legislación y políticas neutras sobre los derechos generales del niño que no discriminan por motivos étnicos, de género ni ningún otro motivo, el Estado garantiza que todo niño, independientemente de su etnia y de otros motivos de discriminación, pueda disfrutar libre y plenamente de los derechos que le reconocen y conceden las convenciones internacionales.

96. El Gobierno de Suriname tiene como objetivo lograr que, a más tardar en 2015, los niños de todo el territorio, tanto varones como niñas, puedan completar la escolaridad primaria. El Informe de Suriname de 2009 sobre la marcha de las iniciativas relativas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) menciona que la política del Gobierno está

¹⁸ Fuente: Ministerio de Justicia y Policía.

encaminada a proporcionar el acceso del 100% de los niños a la educación básica y a lograr equidad con respecto a la calidad de la enseñanza. La asistencia a la escuela primaria¹⁹ en 2006 fue, en los distintos distritos: Marowijne y Commewijne 96,0%, Paramaribo 96,5%, Wanica y Para 95,6%, Saramacca, Coronie y Nickerie 96,6%, Brokopondo y Sipaliwini 82,8%. La asistencia a la escuela primaria en 2010 en los distritos fue: Marowijne 95,6%, Commewijne 95,8%, Paramaribo 97,5%, Wanica 94,3%, Saramacca 96,2%, Para 96,3%, Brokopondo 94,3%, Sipaliwini 89,0%, Coronie 100,0% y Nickerie 97,7%. Esta información muestra que el supuesto porcentaje del 40% de asistencia a la escuela primaria en el interior del país es incorrecto. El interior abarca los siguientes distritos: Brokopondo, Marowijne, Sipaliwini, Para Oriental y Occidental, Santigron en Wanica y Kalebaskreek en Saramacca. Las escuelas del interior están ubicadas en zonas tanto cimarronas como indígenas.

97. El idioma en que se imparte la enseñanza es el holandés, que es el idioma oficial, pero en la práctica en la educación preescolar y en los grados primero a tercero la enseñanza también se imparte a los alumnos en su idioma materno. Por el momento no existe una política de incorporar los idiomas locales como idiomas de enseñanza en la escuela.

98. Suriname estudia continuamente estrategias innovadoras para hacer frente a los retos que plantea el interior del país. Una de ellas consiste en el establecimiento de un denominado "centro nuclear". En colaboración con otros ministerios, especialmente el Ministerio de Desarrollo Regional, se estableció un sistema nuclear que alberga un centro educativo en Albina y Moengo. Pese a que los niños que viven en el interior enfrentan más dificultades que los que residen en otras partes, está aumentando el número de niños que reciben educación superior en los distritos y en Paramaribo. El número de estudiantes secundarios y universitarios aumenta anualmente. Ello es indicio de un mejoramiento constante en la materia. El Gobierno de la República de Suriname actúa ininterrumpidamente para mejorar las oportunidades educativas en el interior del país.

99. La educación está subvencionada por el Estado. También existe un programa de becas para estudiantes de instituciones secundarias y terciarias. Los estudiantes de las instituciones primarias reciben ayuda financiera pública para adquirir el material escolar necesario, por ejemplo libros de texto y lápices. Además se brindan becas y financiación adicional a los estudiantes del nivel secundario superior que no cuentan con recursos suficientes. El costo del servicio de transporte de estudiantes también forma parte del plan de subsidios públicos a la educación. Puesto que esta es parte integrante del desarrollo cultural de las personas y las colectividades, el Estado desea afirmar que el objetivo principal de financiar la educación es ofrecer oportunidades educativas en todos los niveles a todos los miembros de la sociedad surinamesa, independientemente de su raza, sexo, religión y situación financiera. El financiamiento de la enseñanza también es un medio para promover y garantizar la libertad de educación.

100. La Ley de Matrimonios Asiáticos fue derogada mediante la Resolución N° 4190/03 de 17 de junio de 2003, que estableció la fecha de entrada en vigor de la Ley de 10 de septiembre de 1973 y fijó nuevas normas relativas a la celebración y a la disolución del matrimonio (revisión de la Ley del Matrimonio de 1973). Desde el 17 de junio de 2003 no se han celebrado casamientos con arreglo a la Ley de Matrimonios Asiáticos, y por consiguiente el Estado no puede presentar al Comité las estadísticas solicitadas sobre el

¹⁹ Véase el Atlas 2013 de Desarrollo Humano en Suriname, Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Suriname, págs. 100 y ss. Según este documento, el índice de asistencia a la escuela primaria es la relación entre el número de niños de edad oficial de escolarización primaria matriculados en la enseñanza primaria y la población total infantil de edad oficial de escolarización primaria, expresada como porcentaje.

número de no asiáticos que contrajeron matrimonio en virtud de esta ley después de esa fecha. La edad mínima legal para contraer matrimonio fue elevada a 15 años para la mujer y a 17 años para el hombre. Además, se introdujeron modificaciones en el título IV del Libro I del Código Civil de Suriname. También se aplicaron las normas de dicho código. El Gobierno de Suriname nombró un comité para que evaluara esas edades y, según las recomendaciones que contiene el informe final de dicho órgano, la edad mínima para contraer matrimonio debería elevarse a los 18 años tanto para las niñas como para los niños. Ya se han adoptado medidas para enmendar el Código Civil con el fin de conformar la edad para contraer matrimonio a la que establece el Pacto.

No discriminación ante la ley y protección de las minorías nacionales (arts. 26 y 27) (CCPR/CO/80/SUR, párr. 21)

101. La Plataforma de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) de Suriname se refiere al hecho de que no se ha mencionado a estas personas en el informe periódico nacional en relación con el debate sobre la no discriminación ante la ley y la protección de las minorías nacionales. Sin embargo, el Estado opina que no ha ocurrido ningún hecho ni existe ninguna circunstancia que indiquen discriminación ni situación desfavorecida de este grupo. Al amparo de la legislación actual goza de protección al igual que todos los demás ciudadanos.

102. Con respecto a la cuestión de los derechos a la tierra, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso *Saamaka* relativo a dicha cuestión y las medidas ulteriores de su ejecución deben considerarse teniendo en cuenta la singular y bastante compleja estructura de la sociedad de Suriname. Esa complejidad obedece a su composición multiétnica, multirreligiosa y multicultural. Puede considerarse a Suriname como el país cuya población tiene la mayor diversidad étnica del continente sudamericano. La Constitución de la República de Suriname y la legislación que la aplica están, por lo tanto, basadas en las características específicas de nuestra nación. Los objetivos sociales y económicos del Gobierno consisten en construir una economía nacional en beneficio de toda la población, para que todo ciudadano tenga una participación igualitaria en el desarrollo y los logros socioeconómicos.

103. Incumbe también al Estado la obligación de garantizar que la normativa y las políticas nacionales no concedan ningún trato favorable a segmentos específicos de la población con el resultado de discriminar contra el resto. Por consiguiente, toda la actuación del Gobierno dirigida a lograr el desarrollo nacional se basa en los principios fundamentales de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución. La legislación nacional y las políticas públicas conexas están orientadas, por lo tanto, hacia un desarrollo sostenible y una justicia social para todos.

104. Al cumplir Suriname sus obligaciones internacionales con respecto a los derechos a la tierra, en particular las que dimanaban del fallo en el caso *Saamaka*, resultó evidente que una aplicación estricta de la letra de esa decisión planteaba muchas dificultades. Los dilemas que se presentaron pueden deducirse de la siguiente pregunta: ¿cómo puede el Estado enmendar su marco legislativo sobre los derechos a la tierra y los recursos naturales para aplicar el fallo en el caso *Saamaka* sin perjudicar el desarrollo nacional y a otros grupos étnicos de la sociedad surinamesa? En búsqueda de una respuesta, deben tenerse en cuenta: i) los intereses nacionales de toda la población del territorio de Suriname; y ii) los principios y normativa de nuestra democracia parlamentaria. También pueden surgir dilemas a la luz de los siguientes interrogantes:

- ¿No se ven socavados los cimientos de la democracia por la decisión contenida en el fallo?

- Si fuera posible tratar de aplicar la decisión del fallo, ¿no se vería gravemente impugnada la base de la forma de gobierno de Suriname?

105. Existe la voluntad política de emprender los pasos necesarios para aplicar el fallo del caso *Saamaka*. No obstante, el alcance y la naturaleza de esa decisión obligan al Estado a ejercer cierta medida de prudencia. ¡El Estado desea ejecutar el fallo de la manera más responsable posible, cerciorándose al mismo tiempo de que toda la nación protagonice ampliamente el proceso que hemos emprendido!

106. El Estado tiene la obligación de actuar con cautela, pues es evidente que en algunos aspectos importantes de los derechos a la tierra no hay acuerdo hasta la fecha entre las comunidades indígenas y tribales. Se manifiestan claramente posiciones discrepantes en el intento de acordar un mapa de uso de la tierra por estas comunidades. Ello hace que sea bastante complejo para el Estado adoptar medidas concretas de delimitación y demarcación. La prudencia del Estado también obedece a que diversos elementos relativos a la cuestión de los derechos a la tierra en general y al fallo del caso *Saamaka* en particular exigen implícita o explícitamente legislación nueva o revisada e incluso enmiendas de la Constitución. Algunas de las complicaciones referidas y de los retos intrínsecos del asunto son de índole jurídica, política, administrativa y socioeconómica.

107. Desde el punto de vista jurídico, cabe observar que la Constitución y el resto de la normativa exigen el cumplimiento de los procedimientos constitucionales en la promulgación de nuevas leyes nacionales o en la enmienda de las existentes.

108. El procedimiento legislativo que se sigue habitualmente y se basa en el requisito ya mencionado consiste en una iniciativa legislativa emanada del ministerio competente del Gobierno. Un anteproyecto de ley es sometido al estudio y aprobación del Consejo de Ministros. Después de su aprobación, se presenta un proyecto de ley al Consejo de Estado para que formule observaciones. Después de que el Consejo de Estado (es decir, el poder ejecutivo) le ha dado su aprobación preliminar, el Presidente somete el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que tiene la potestad de aprobarlo o rechazarlo. Los diferentes principios de la organización democrática de nuestro Estado se articulan en la estructura de nuestra democracia política, según la cual los principios rectores son la soberanía del pueblo y la separación de poderes.

109. Considerando que ciertos aspectos del fallo también suponen que Suriname debe enmendar su Constitución, debe destacarse que la actual Constitución de la República de Suriname fue aprobada por referendo el 30 de septiembre de 1987 por aproximadamente el 98% de su población. Llevar a cabo cualquier modificación fundamental de la Constitución exigirá por ende un referendo. Esa es por cierto la situación, dado que el fallo ordena con carácter estricto la "delimitación, demarcación y concesión de un título colectivo sobre el territorio de los miembros del pueblo Saamaka".

110. El Estado sostiene la opinión de que las particularidades politicoadministrativas y socioculturales están vinculadas entre sí. Esta circunstancia forma parte de la base de la elaboración de las disposiciones constitucionales relativas a la gobernanza, tales como las que atañen a la administración pública, los gobiernos regionales, la legislación regional y las autoridades regionales (caps. XX a XXIII). Pero también la estructura de los órganos administrativos y la descentralización de la administración y la legislación tienen origen en las características étnicas específicas de nuestra población en general y de las comunidades indígenas y tribales en particular. De esto da testimonio el hecho de que, históricamente, el Estado ha reconocido las estructuras tradicionales y las normas consuetudinarias de las comunidades indígenas y tribales, y en particular las estrategias de sustento de dichas comunidades y sus mecanismos y/o estructuras tradicionales de autogobierno, lo cual está consagrado en la normativa pertinente, como por ejemplo el Decreto sobre los Principios de la Política relativa a la Tierra (L-Decreet Beginselen Grondbeleid).

111. La cuestión de los derechos a la tierra es un elemento importante del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2016, que tiene categoría de ley al haber sido adoptado por la Asamblea Nacional. En dicho documento se indica que:

"Bij de benadering van dit vraagstuk moet met twee zaken rekening worden gehouden. Ten eerste, de claim van de marrons (bosnegers) en de inheemsen (indianen) op de gebieden die zij van oudsher bewonen, bewerken en gebruiken (hun orpen; de gebieden die zij gebruiken om te voorzien in hun levensonderhoud; voor religieuze en culturele doeleinden, etc.): deze claim is erop gericht dat de Staat Suriname moet erkennen, dat zij, de marrons (bosnegers) en de inheemsen (indianen), het recht hebben om te beschikken over deze gebieden.

Ten tweede, het standpunt van de Staat dat het totale grondgebied van de Republiek Suriname behoort tot het domein van de Staat Suriname, met uitzondering van de gevallen waar derden het tegendeel kunnen bewijzen. De Staat stelt zich tevens op het standpunt dat elke Surinamer, dus ook de marrons en inheemsen, het recht heeft een stuk grond aan te vragen binnen dit 'staatsdomein'.²⁰

112. En esencia, los párrafos transcritos establecen que al tratar la cuestión de los derechos a la tierra deben tenerse en cuenta dos aspectos. En primer lugar, el Estado está obligado a reconocer que las tierras tradicionalmente ocupadas, cultivadas y utilizadas con fines necesarios por las comunidades indígenas y tribales deben quedar a disposición de dichas comunidades por motivos de sostenibilidad. En segundo lugar, el Estado sostiene el principio de que la totalidad del territorio es tierra pública de la nación. No obstante, los nacionales surinameses, con inclusión de los indígenas y los cimarrones, tienen derecho a solicitar un lote de tierra pública.

113. Por consiguiente, el compromiso del Estado de resolver eficazmente la cuestión del derecho a la tierra ha quedado afirmado al darle relevancia en el programa nacional de desarrollo del Gobierno.

114. Este compromiso se reitera también en otras declaraciones de política del Gobierno. Suriname sostiene que la respuesta definitiva a la cuestión de los derechos a la tierra de las comunidades tribales del interior del país debe contar con la aprobación de toda la nación. La justificación de esta resuelta posición del Estado es que esta cuestión casi ha desembocado en un estado de conflicto entre las comunidades tribales, entre estas y el Gobierno central y entre dichas comunidades y la sociedad surinamesa en general. Además, la aplicación de varias perspectivas y enfoques para tratar la cuestión, por ejemplo una perspectiva histórica frente a una perspectiva de desarrollo, la complica aún más. El Estado ha contraído con la población de Suriname un contrato de desarrollo socioeconómico mediante la explotación estratégica de los recursos naturales del país. Huelga explicar que un amplio segmento de la población surinamesa teme que sus legítimos intereses de desarrollo queden marginados por causa de los intereses de las comunidades tribales. El Gobierno opina que la cuestión de los derechos a la tierra relativos a las comunidades tribales se ha enconado durante demasiado tiempo y que urge resolverla efectiva y sosteniblemente.

115. Por iniciativa del Presidente de la República, se celebró en octubre de 2011 la Conferencia sobre los Derechos a la Tierra. El objetivo de esta reunión fue la de entablar un diálogo amplio con representantes de las comunidades indígenas y otras comunidades tribales con el fin de lograr una solución aceptable y consensuada entre todas las partes interesadas. Antes de la celebración de dicha conferencia se llevó a cabo un intenso proceso de consultas con todos los interesados para determinar las cuestiones principales que exigían la atención de todas las autoridades competentes. Algunas de las cuestiones

²⁰ Plan Nacional de Desarrollo 2012-2016, pág. 179.

indicadas en relación con la cuestión de los derechos a la tierra que están en juego, son: los Decretos de Reforma Agraria (L-Decrees), la Ley de Minería, los derechos alodiales a la propiedad y la propiedad inmueble.

116. Lamentablemente, el resultado de las intervenciones subsiguientes no fue el esperado. Sin embargo, se ha puesto en marcha una futura colaboración en la cuestión de los derechos a la tierra. El resultado previsto de la conferencia fue una Declaración Conjunta en la que se expresaba que todas las partes involucradas se comprometían a continuar colaborando con el fin de resolver la cuestión de los derechos a la tierra de manera consensuada y sostenible. Estuvieron representadas las tribus saamaka, matawai, kwintie y m araka y cimarrona, así como las comunidades tribales indígenas.

117. Al margen de las dos actividades específicas descritas en los párrafos 107 y 108, se llevan a cabo consultas institucionalizadas y periódicas entre el Ministerio de Desarrollo Regional y las autoridades tradicionales del interior. Estas consultas institucionalizadas y periódicas versan sobre diversas cuestiones de desarrollo relativas a los distritos y las comunidades mediante un enfoque asociativo e inclusivo.

118. A nivel presidencial, se ha nombrado un Comisionado Presidencial Especial para los Derechos a la Tierra. El Comisionado tiene a su cargo tareas consultivas en relación con todos los aspectos de esta cuestión. Una parte específica de la función consultiva de este funcionario consiste en proponer al Presidente medidas para impedir consecuencias sociales inequitativas que tengan origen en la cuestión de los derechos a la tierra.

119. Estas actuaciones por iniciativa del Gobierno de Suriname demuestran que el Estado es plenamente consciente de la importancia de la cuestión de los derechos a la tierra y de la responsabilidad que le incumbe en el proceso de producir una solución mutuamente aceptable para una cuestión que requiere una alta participación nacional. El Estado ha de continuar resueltamente sus esfuerzos en este sentido.

Perspectivas de futuro

120. El Estado de Suriname considera que el proceso que se ha puesto en marcha para llegar al reconocimiento definitivo de los derechos a la tierra de las comunidades tribales debe incluir el mantenimiento de un diálogo constructivo entre todos los grupos interesados. Se estima que el diálogo constructivo tiene enorme importancia para lograr la coexistencia pacífica y la estabilidad en el país. Es evidente que hay cierta falta de confianza en el Gobierno central, que en parte está determinada históricamente y en parte por el surgimiento de nuestra joven república. El Estado no escatima esfuerzos para construir una relación más sólida con las autoridades tribales tradicionales puesto que opina que una colaboración mutuamente respetuosa produce resultados más concretos.

121. El Estado aplica estrategias innovadoras de consulta con los interesados para comprender mejor las grandes complicaciones que enfrenta debido a las multifacéticas cuestiones que están en juego. Este enfoque garantiza una colaboración más sólida y fructífera en aras de aplicar gradualmente los compromisos internacionales y regionales del Estado. Suriname opina que un acuerdo consensuado y documentado relativo a un mapa de utilización de la tierra entre las comunidades indígenas y otras comunidades tribales podría acelerar todo el proceso de elaboración de un proyecto de ley de delimitación y demarcación de las tierras de las comunidades indígenas y tribales y el proceso subsiguiente relativo a los derechos colectivos.

122. Lamentablemente, después de múltiples consultas entre las comunidades indígenas y tribales no se ha alcanzado aún un acuerdo entre la tribu saamaka y las tribus indígenas, situación que obstaculiza la aceptación de cualquier mapa de uso de la tierra por el Estado.

123. Cabe observar que el Estado ha facilitado dicho proceso de consultas entre las comunidades indígenas y otras comunidades tribales, en un esfuerzo por erradicar todas las posibles barreras que impiden a las partes interesadas llegar a un consenso. No cabe duda alguna de que el Gobierno formulará un cuerpo de leyes sobre la base de mapas convenidos, entre otras cosas, con respecto los títulos colectivos a la tierra solo después de que las comunidades involucradas hayan llegado a un acuerdo.

124. Una vez concluidas las deliberaciones, y de conformidad con los procedimientos constitucionales, la posición final del Estado la determinará el parlamento, que es la autoridad estatal suprema de Suriname.

125. Al respecto, debe observarse que el artículo 55.2 de la Constitución de Suriname establece que la Asamblea Nacional es el órgano supremo del Estado. Es importante subrayar que todos los miembros del parlamento actúan de manera independiente y libre, incluso en la emisión de sus votos. La votación se basa en la discreción y juicio personales de cada miembro del parlamento, lo cual garantiza el libre ejercicio de su mandato.

126. La actuación independiente y libre de los miembros del parlamento supone que ni el Gobierno ni un partido político o grupo de partidos puede imponer a ningún miembro el sentido de su voto. Por consiguiente, esta toma de decisiones independiente y libre conlleva que el Estado, como poder ejecutivo, tiene que acatar toda decisión que emane de la Asamblea Nacional.

127. Debido a los resultados decepcionantes del proceso encaminado a elaborar un mapa de utilización de la tierra, el Estado se encuentra aún más motivado para emprender nuevos esfuerzos con el fin de formular una hoja de ruta pragmática para el cumplimiento de las obligaciones pendientes en el contexto del fallo en el caso *Saamaka*.

128. Con respecto al párrafo 110, también vale la pena mencionar que el Presidente establecerá una Oficina Ejecutiva para el Comisionado Presidencial sobre los Derechos a la Tierra, con la finalidad de cumplir más eficazmente las responsabilidades del Estado con respecto a las cuestiones de los derechos colectivos a la tierra.

129. El Estado reitera que está plenamente resuelto a trabajar por una solución aceptable de este asunto, que se considera de importancia nacional. Por lo tanto, no escatimará esfuerzos para subrayar la importancia de una actitud de cooperación de todos los interesados, convencido como está de que la unificación de toda la nación constituye un requisito previo indispensable.

130. Desde que la Corte Interamericana pronunció su fallo en el caso *Saamaka*, no se ha concedido ningún permiso para la tala de bosques en la zona que se considera territorio tribal. Además, en 2011 se establecieron dos bosques comunitarios para las comunidades tribales. Puede mencionarse que se han recibido dos nuevas solicitudes de establecimiento de bosques comunitarios.

131. La evaluación de la repercusión ambiental y social (ERAS) es un requisito para conceder permisos a los proyectos de desarrollo o inversión en el territorio tradicional indígena o tribal. El Estado informa al Comité de que los promotores de los proyectos contratan a sus propios consultores para realizar las ERAS respectivas. A su vez el Estado, por medio del Instituto Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo de Suriname (NIMOS), evalúa y aprueba las ERAS preparadas por los consultores privados.

132. Las siguientes ERAS se llevaron a cabo en el período 2002-2013:

- Evaluación de la repercusión ambiental de Rosebel, Gold Project Suriname, Rescan Environment Services LTD, 2002;
- Kersten River Lodge Suriname N.V., proyecto Berg en Dal; evaluación de la repercusión ambiental y social, octubre de 2007;

- Evaluación final de la repercusión ambiental y social, volumen I, Nassau Plateau Bauxite Mine Paranam, Suriname, agosto de 2012;
- Informe sobre la ERAS final en el proyecto Merian, volumen I: Introducción y Datos de Base Ambientales y Sociales, 31 de enero de 2013;
- Evaluación final de la repercusión ambiental y social de Rosebel Gold Mines, proyecto de ampliación de las instalaciones de almacenamiento, marzo de 2013.

133. Un número considerable de miembros de varias comunidades tribales se dedican a la extracción de oro en pequeña escala. Estos mineros y sus actividades han estado durante mucho tiempo carentes de coordinación y supervisión. Esta situación, conocida como del "oeste salvaje" plantea graves peligros en materia de seguridad, orden público y salud. Por estos motivos, el Gobierno ha emprendido la realización de un plan integral de regulación del sector extractivo del oro centrado principalmente en la minería en pequeña escala, que aparentemente es lucrativa para muchos grupos.

134. Desgraciadamente, se ha puesto de manifiesto que los mineros, particularmente los que extraen en pequeña escala, cometen ocupaciones ilegales, realizan actividades ilegales de extracción de oro y emplean métodos ilegales de extracción y refinación del metal.

135. Con el objetivo de eliminar el caos, restaurar el orden público y mitigar los riesgos para la salud y el medio ambiente, se ha reubicado a gran cantidad de mineros en pequeña escala que actuaban ilegalmente. Se trata de una actividad permanente encaminada a garantizar la paz y la seguridad en el interior. Muchos de estos mineros en pequeña escala que actuaban ilegalmente han sido trasladados a zonas escogidas con tal fin, donde la extracción de oro en pequeña escala está aprobada y donde puede vigilarse el cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias en la realización de esa actividad.

136. Para lograr un criterio nacional equilibrado y no discriminatorio, el Gobierno de Suriname estableció la Comisión Presidencial de Regulación del Sector de la Minería del Oro para dirigir la reorganización de esta actividad. Para obtener la participación de todos los interesados en el proceso de regulación de este sector, el Gobierno organizó la "Gran Gowtu Krutu" (gran consulta sobre el oro), los días 18 y 19 de febrero de 2011, no en la capital —Paramaribo— sino en Snésie Kondre, que es territorio tribal. También se ha confiado a la Comisión Presidencial la tarea de dar pronto comienzo al proceso de regulación en consulta con los líderes tradicionales de las comunidades tribales e indígenas. Este enfoque se consideró necesario para facilitar la identificación de los temas importantes que debían debatirse en la "Gran Gowtu Krutu", entre los que se cuenta la cuestión de los derechos a la tierra. Las autoridades tradicionales de las comunidades tribales e indígenas y los interesados pertenecientes al sector de la minería del oro estuvieron ampliamente representados en esta consulta, al igual que el Presidente, el Gobierno y todos los demás interesados gubernamentales. Desafortunadamente, la "Gran Gowtu Krutu" todavía no ha producido un resultado favorable a los intereses de todos.

137. Un nuevo esfuerzo por continuar las consultas con las comunidades tribales dio como resultado la institucionalización de las llamadas Consultas Estructurales con el Sector del Oro, que se celebran con todos los interesados de este sector.

138. Dichas consultas se realizan bimestralmente con el objetivo de: i) debatir, sobre una base estructural, los diversos problemas y/o desafíos que enfrenta el sector; ii) examinar y, de ser necesario, ajustar el rumbo del proceso de regulación del sector; y iii) facilitar la gradual modernización del sector de la minería del oro. La representación de los interesados está integrada por: i) la Comisión Presidencial; ii) todos los grupos organizados de mineros en pequeña escala ("porknockers"); iii) todas las medianas empresas dedicadas a la extracción de oro; iv) todas las grandes empresas (multinacionales) de extracción de oro; y v) las autoridades de todas las comunidades tribales.

139. Del amplio conjunto de cuestiones que se trataron durante dichas reuniones, puede deducirse que todos los interesados, en especial los representantes de las comunidades tribales, tuvieron suficientes oportunidades para tratar los asuntos que les interesaban o preocupaban. Se debatieron, por ejemplo, las siguientes cuestiones: i) el fortalecimiento de las autoridades tradicionales; ii) el establecimiento de un campus y una escuela de minería y procesamiento de minerales en Snesie Kondre (territorio tribal); iii) la política de concesiones y los derechos a la tierra.

140. Debe observarse que ni la Comisión Presidencial ni las Consultas Estructurales recibieron un mandato específico para abordar la cuestión de los derechos a la tierra. No obstante, ambos foros contribuyen indirectamente a identificar las principales preocupaciones, intereses y dilemas en relación con la cuestión de los derechos a la tierra de las comunidades tribales y la población indígena.

141. El Estado reconoce y respeta indiscutiblemente el liderazgo tradicional de las comunidades indígenas y otras comunidades tribales, así como los mecanismos e instrumentos tradicionales de consulta que utilizan y sus estructuras de adopción de decisiones. Por consiguiente, el sistema tradicional de gobernanza tiene cabida en el enfoque que aplica el Estado con respecto a las cuestiones que atañen a las comunidades tribales. Esta evidente flexibilidad del Gobierno se inspira en su convicción de que sus objetivos sociales y económicos tienen como objetivo construir una economía nacional en beneficio de toda la población, en la que todo ciudadano disfrute por igual del desarrollo y los logros socioeconómicos, dentro del respeto de las características culturales y socioeconómicas de los sectores históricamente desfavorecidos de nuestra población.

142. Por ende, se llevan a cabo consultas periódicas entre el Gobierno y las comunidades tribales con las que se consigue la participación local en la formulación de políticas públicas, entre otras las relativas al uso de los recursos, la planificación del desarrollo y los posibles traslados a las zonas tradicionalmente habitadas por las comunidades indígenas y tribales. En vista de las numerosas cuestiones pendientes relativas a la concesión legal de títulos colectivos a la tierra a las comunidades indígenas y otras comunidades tribales tendrá especial importancia, tanto para el Estado como para dichas comunidades, el mejoramiento de los mecanismos de consulta. El Estado está elaborando un modelo para dar mayor relevancia al principio del consentimiento previo informado y libre (CPIL) y continuará actuando para mejorar las consultas con las comunidades indígenas y otras comunidades tribales para fomentar dicho principio dentro de las estructuras tradicionales existentes.

143. Mientras tanto, los mecanismos consultivos actuales también prevén la participación de las comunidades indígenas y otras comunidades tribales en las negociaciones relativas a las concesiones de tala de bosques y de minería. De esta manera, las comunidades tribales locales participan más activamente y sus intereses se toman en cuenta. Muy recientemente se ha seguido este enfoque en las negociaciones con Iamgold.

144. El Estado ya ha demostrado su resuelto apoyo al espíritu del CPIL. Como ejemplo de ello se puede mencionar la decisión del Presidente de la República de aplazar la ejecución del proyecto de Tapajai Energy hasta nuevo aviso. Además, el Presidente de la República ha ordenado a la empresa petrolera estatal N.V. Staatsolie Maatschappij, que ya ha invertido millones de dólares estadounidenses en la preparación de ese ambicioso proyecto, que cese inmediatamente sus actividades conexas. El Estado adoptó una valiente decisión al suspender la ejecución de este proyecto a pesar del impulso considerable que se preveía había de dar al desarrollo del país en beneficio de todos. En la toma de esta decisión se consideraron: i) las preocupaciones e intereses especiales de las comunidades indígenas y otras comunidades tribales; y ii) la falta de una implicación amplia en el proyecto en el momento en que se adoptó la decisión.

145. El Estado reconoce que las consultas son un importante instrumento para que las personas y los grupos disfruten del derecho a participar en el proceso estatal de adopción de decisiones sobre cuestiones que afectan a sus vidas. Asimismo, las consultas hacen más probable el logro de un apoyo amplio y consiguientemente de un protagonismo en los procesos de desarrollo. No obstante, el Estado es plenamente consciente de la necesidad de permanecer alerta para que las consultas sigan siendo un medio y no se conviertan en un fin en sí mismas. La convocación de consultas sirve para lograr paulatinamente un desarrollo sostenible a nivel nacional, local e individual, en particular para las comunidades tribales que tradicionalmente han habitado, cultivado y utilizado la tierra como fuente de su sustento.

146. Sobre la base de lo mencionado más arriba, Suriname no estima que el principio del consentimiento previo informado y libre vulnere los derechos legales de toda la población a beneficiarse con los recursos naturales. Tampoco considera el Estado que el cumplimiento de dicho principio sea una limitación al cumplimiento de su obligación jurídica de realizar un desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de toda la población mediante la explotación de los recursos naturales. El Estado opina que un enfoque equilibrado serviría al objetivo del desarrollo general de la nación. Por lo tanto, se niega a adherir a ningún enfoque motivado únicamente por intereses económicos o políticos, porque ello pondría en peligro la ejemplar estructura pacífica y pluralista de la sociedad surinamesa.

147. En su respuesta inicial con respecto al supuesto trato discriminatorio de la población indígena, el Estado impugna esa apreciación. Sin embargo, Suriname se esforzará por lograr un cambio en dicha apreciación. Además, desearía recibir información más detallada sobre los tipos y formas de la discriminación comunicada. Hasta la fecha, el Estado refuta la alegación de que exista un trato discriminatorio como forma de discriminación institucionalizada. En este momento, el Estado no puede responder a la alegación de prácticas discriminatorias, pues para hacerlo adecuadamente es necesario que se le comunique la información pertinente.

148. Para facilitar una respuesta exhaustiva a la alegación de trato discriminatorio de determinado grupo étnico, el Estado ha de explayarse sobre el marco jurídico y político vigente en Suriname.

149. La Constitución de la República de Suriname es la base jurídica de la legislación y las políticas nacionales de lucha contra la discriminación racial. Además, se han promulgado leyes para promover el principio de no discriminación y de igualdad ante la ley de los ciudadanos nacionales y extranjeros.

150. La República de Suriname es un Estado soberano democrático que acata el principio del Estado de derecho y se basa en la dignidad humana y la promoción de los derechos y libertades humanos.

151. Como se expuso en el segundo informe periódico y lo ratificó el Comité en sus observaciones finales, la Constitución y el Código Penal contienen disposiciones contra la discriminación racial. El artículo 8 de la Constitución establece inequívocamente: "No se discriminará a ninguna persona por motivos de nacimiento, sexo, raza, idioma, religión, educación, opinión política, situación económica o cualquier otra condición".

152. El artículo 126 del Código Penal estipula que la discriminación significa toda distinción, restricción o preferencia —por lo tanto, también por motivos de raza— que tenga la finalidad o el efecto de anular o menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito político, económico, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

153. Otros artículos de los capítulos V y VI de la Constitución que versan sobre los derechos fundamentales no establecen distinción alguna entre las personas por motivos de raza, con lo cual indican que todas las personas son acreedoras de los mismos derechos.

154. Con arreglo al artículo 2.1 del Pacto, el Estado ha adoptado varios instrumentos legislativos que establecen restricciones o distinciones entre ciudadanos y no ciudadanos. Por ejemplo, la Ley Electoral concede solo a los nacionales surinameses el derecho a votar y ser elegidos o nombrados para ocupar altos cargos políticos y administrativos. Los residentes legales no están excluidos y pueden ser elegidos como miembros de la Asamblea Nacional y nombrados miembros del poder judicial y del poder ejecutivo.

155. La Ley de Nacionalidad y Ciudadanía de Suriname contiene normas con respecto a la nacionalidad, la ciudadanía y la naturalización de las personas. Esta ley no discrimina a ninguna nacionalidad en particular, pero establece normas objetivas que deben satisfacerse para que una persona pueda recibir la nacionalidad surinamesa. Según lo establecido en la Constitución, ello debe hacerse mediante ley de la Asamblea Nacional.

156. El Preámbulo de la Constitución dice: "Convencidos de que tenemos la obligación de respetar y salvaguardar los principios de libertad, igualdad y democracia y los derechos humanos y libertades fundamentales...". El Estado pone de relieve que respeta y acata su ley nacional suprema y que al hacerlo cumple su obligación constitucional de funcionar de conformidad con el principio de igualdad y de garantizar el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en una sociedad democrática.

157. Los derechos civiles y políticos de las personas están garantizados por la Constitución de la República de Suriname. La Constitución vigente fue adoptada por referendo público en 1987 y enmendada en 1992. Aunque no menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos, claramente se inspiró en ella. Todo el capítulo I de la Constitución se ocupa de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales básicos del individuo.

158. Asimismo, la Constitución abarca otros derechos especificados en el Pacto, en particular el derecho a la libre determinación. Mediante el pleno ejercicio de este derecho, el pueblo estableció, individual y colectivamente, un sistema político que le brinda la posibilidad de promover libremente el desarrollo económico, social y cultural. Como se estipula en el artículo 1 de la Constitución, la República de Suriname es un Estado democrático basado en los principios de la soberanía (libre determinación) del pueblo y de la garantía de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Los capítulos V y VI de la Constitución contienen normas relativas a la protección de los ciudadanos en condiciones de igualdad. Cabe mencionar los artículos 8 a 39, que salvaguardan los derechos fundamentales y sociales de los ciudadanos de la República de Suriname.

159. La población de Suriname está compuesta por varios grupos étnicos con sus propios idiomas, culturas y tradiciones diferentes, que pueden disfrutar y expresar libremente sin ninguna restricción legal. Se conoce a Suriname como un mundo en miniatura, integrado por: indostanos, 148.443 (27,4%); criollos, 84.933 (15,7%); javaneses, 73.975 (13,7%); cimarrones, 117.567 (21,7%); chinos, 7.885 (1,5%); pueblos indígenas, 20.344 (3,8%); afrosurinameses, 3.923 (0,7%); mestizos, 72.340 (13,4%); caucásicos, 1.667 (0,3%); el resto, 7.166 (1,3%); sin raza determinada, 1.805 (0,3%); no contestan, 1.590 (0,3%) (censo de 2013).

160. La política cultural de Suriname se basa en la pluralidad de su población y por consiguiente en la democracia cultural, caracterizada por la igualdad de todas las culturas y la aceptación y el aprecio mutuos de las expresiones culturales de los demás. La política cultural se ajusta al artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También tiene como objetivo la participación plena y libre de cada persona en la vida

cultural a nivel nacional, regional e internacional. Además, la política cultural debe facilitar a todos el disfrute del arte y la participación en el progreso científico y sus resultados.

161. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), puede considerarse a la cultura como la totalidad de las características espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de una sociedad o grupo social. La cultura no abarca solamente el arte y la literatura sino que también incluye los estilos de vida, los derechos fundamentales de la persona humana, los sistemas de valores, las tradiciones y las convenciones. Es la cultura lo que faculta a los seres humanos para pensar sobre sí mismos. Gracias a ella, los seres humanos discernen los valores y adoptan decisiones. Se debe a la cultura el que las personas se expresen, sean conscientes de sí mismas, reconozcan sus insuficiencias, estudien sus logros y creen obras que superan sus propias limitaciones. En la práctica la cultura refleja el pasado, pero un pasado viviente porque lo disfrutaban las generaciones actuales y está vinculado a la vida cotidiana de los seres humanos como reflejo de sus actos.

162. Con respecto a la no discriminación y la igualdad, el Estado subraya que el número de personas cimarronas e indígenas que participan en la vida cotidiana y ocupan cargos en la comunidad está aumentando constantemente. En la administración actual, compuesta por 17 ministerios, 5 están ocupados por cimarrones: los Ministerios de Hacienda; Desarrollo Regional; Transporte, Comunicaciones y Turismo; Asuntos Sociales; y Justicia y Policía. De los 51 miembros de la Asamblea Nacional, 9 hombres y una mujer son cimarrones, y 2 hombres son indígenas. Ello da cuenta una vez más de los esfuerzos que realiza el Gobierno en este sentido; no obstante, es consciente de que todavía queda mucho por hacer en esta esfera. Las comunidades indígenas y tribales están representadas en los poderes legislativo, ejecutivo —incluidos cargos consultivos de alto nivel— y judicial del Estado. Los pueblos indígenas y tribales están además bien representados en los órganos representativos descentralizados, es decir los concejos de distrito (órganos representativos superiores de los distritos) y los concejos locales (órganos representativos superiores de las jurisdicciones administrativas). Asimismo, cinco comisionados de distrito —excluidos los nuevos funcionarios— que están a cargo de la gestión diaria de los distritos son de ascendencia tribal. La representación de las comunidades tribales se manifiesta también en varios altos cargos consultivos en el poder ejecutivo, entre otros en el Consejo de Estado. En el Gabinete del Presidente también hay dos asesores presidenciales de ascendencia tribal.

163. Las medidas adoptadas por el Gobierno de Suriname para prevenir o mitigar la escorrentía de mercurio cerca de las comunidades indígenas son parte integral de las actividades conexas del Estado descritas en los párrafos 124 a 128. Hay dos tipos de extracción de oro en el país: la minería en gran escala que llevan a cabo actualmente empresas mineras internacionales y la minería en pequeña escala, más difundida y realizada por particulares. En la minería en pequeña escala se utiliza mercurio para extraer oro del suelo. Esta práctica se limita a cierta zona de Suriname, que comienza en el noroeste del país y llega hasta la frontera meridional con el Brasil. Las principales características de la minería del oro en pequeña escala en Suriname son:

- La realización de actividades tanto legales (con permiso) como ilegales (sin permiso);
- El uso de máquinas pesadas;
- El no respeto de los aspectos ambientales y sociales, lo cual resulta, por ejemplo, en deforestación y contaminación del agua;
- El trabajo de extranjeros en situación irregular e indocumentados (por ejemplo, brasileños);
- La utilización de grandes cantidades de mercurio.

164. Suriname es consciente de los efectos negativos que la minería del oro en pequeña escala efectuada de manera irresponsable tiene en el medio ambiente y las comunidades. Por esa razón, el Estado ha puesto en ejecución recientemente algunas medidas específicas para combatir el problema.

165. Se creó un proyecto titulado Reducción de la Contaminación causada por la Minería del Oro, cuya ejecución estuvo a cargo del Departamento de Geología y Minería del Ministerio de Recursos Naturales. El proyecto se ejecutó de 2003 a 2006, y sus objetivos fueron:

- Mejorar la gestión del sector extractivo del oro en pequeña y mediana escala con el fin de reducir sus repercusiones en el ecosistema prioritario de Suriname (con financiación del World Wildlife Fund (WWF));
- Promover el uso de retortas en el sector de la minería del oro en pequeña escala.

166. Las medidas que se aplican actualmente en relación con la minería del oro en pequeña escala son las siguientes:

- El Presidente ha establecido una comisión para reformar y regular las actividades ilegales de la minería del oro en pequeña escala.
- Se han creado Centros de Servicios Mineros (CSM) en varias partes del interior para registrar a los mineros y proporcionarles servicios. Uno de estos centros ha comenzado sus actividades como proyecto piloto en la parte oriental del país.
- Ha comenzado a funcionar una escuela de minería y procesamiento de minerales para capacitar a los trabajadores del sector minero en la utilización de técnicas libres de mercurio.

III. Difusión de información relativa al Pacto, artículos 1 a 27

167. En la primera parte del presente informe se tratan en detalle las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos durante su 80º período de sesiones (CCPR/CO/80/SUR), así como el seguimiento de las observaciones finales (CCPR/C/95/2). El Estado ha expuesto por ese medio los mecanismos existentes para observar el progreso hacia la plena realización de varios derechos. Por este motivo, el Estado se remitirá a las secciones pertinentes para referirse a varios artículos del Pacto si ya se han tratado en la primera parte.

Artículo 1

El derecho de libre determinación y la libre disposición de las riquezas y recursos naturales

168. La República de Suriname reconoce los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales (arts. 103, 105 y 106 de la Constitución). El derecho de libre determinación está consagrado en la Constitución. La ley fundamental garantiza la democracia y la soberanía del pueblo y sus derechos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad (art. 1 y caps. V y VI). Los procesos constitucionales y políticos posibilitan en la práctica el ejercicio de los derechos que figuran en el artículo 1 del Pacto. La Constitución proporciona el marco legislativo y político para la protección y garantía de los derechos reconocidos en el Pacto. Dentro del marco constitucional se han promulgado leyes para dar efecto a la protección y la salvaguardia de los derechos consagrados en el Pacto.

169. El Estado reitera que el preámbulo de la Constitución demuestra que se ha reconocido también el principio de igualdad y el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en una sociedad democrática, así como los derechos individuales y políticos dentro de la jurisdicción del Estado. La Constitución contiene disposiciones relativas a los derechos especificados en el Pacto. El pueblo surinamés goza del derecho de libre determinación (art. 1 de la Constitución). En pleno ejercicio de este derecho, el pueblo estableció un sistema político que le ofrece la posibilidad de promover libremente el desarrollo económico, social y cultural de cada persona y de la nación en general. Como se estipula en el artículo 1 de su Constitución, la República de Suriname es un Estado soberano democrático que se basa en el derecho de libre determinación del pueblo y que tiene el deber de salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos.

170. Cabe observar que los pueblos indígenas y los cimarrones se dirigieron a los organismos internacionales con referencia a la no discriminación y al derecho de libre determinación, entre otras cosas en relación con los recursos naturales y los derechos a la tierra. El Estado atribuye alta prioridad a la aplicación de los derechos descritos en este artículo y al logro de una solución de los problemas atinentes a la cuestión de los derechos a la tierra. Esta cuestión se trata detalladamente en los párrafos 80 a 135 del presente informe.

171. Para concluir con el artículo 1, el Estado solicita al Comité que considere el informe nacional de 2003 sobre la aplicación del Pacto (cap. II.2, art. 1 del Pacto) como parte integral del presente informe.

Artículo 2

Obligación de respetar los derechos sin discriminación y derecho a la protección judicial

172. Los capítulos V y VI de la Constitución de Suriname conceden a los individuos derechos y libertades que pueden invocarse directamente. Los mismos capítulos también imponen obligaciones jurídicas al Estado en el sentido de respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos por igual. Las violaciones de los derechos fundamentales se enjuician en el Tribunal de Justicia. El hecho de que no exista un tribunal constitucional se considera el principal obstáculo que enfrentan las víctimas para obtener reparación en caso de que se hayan violado los derechos que les reconoce el Pacto. Todavía no se ha establecido dicho tribunal, cuya tarea será examinar las leyes en busca de incompatibilidades con la Constitución y los instrumentos internacionales. Ese tribunal tendrá también competencia para examinar y decidir sobre los actos de los órganos gubernamentales que hayan sido impugnados por motivos de incompatibilidad con los derechos y libertades fundamentales. Como se ha observado anteriormente (párr. 46), el proyecto de ley de establecimiento del tribunal constitucional está a consideración del Consejo de Estado. El Estado desea recalcar una vez más que los artículos 137 y 106 de la Constitución otorgan al poder judicial competencia para decidir en los casos en que la legislación nacional sea incompatible con el capítulo V de la Constitución o con los derechos fundamentales consagrados en convenciones internacionales y regionales y que pueden invocarse directamente. El gobierno de Suriname se ha comprometido a garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos y a adoptar las medidas adecuadas contra quienes los violen.

173. Suriname todavía no cuenta con un instituto independiente para los derechos humanos como se contempla en los Principios de París. El 10 de diciembre de 2008 (SB 2008, N° 137) el Ministerio de Justicia y Policía estableció la Oficina de Derechos

Humanos. Su función consiste en asistir a la República de Suriname en los procedimientos judiciales relativos a violaciones de derechos humanos que se lleven a cabo en foros regionales e internacionales cumpliendo las siguientes funciones: tareas de preparación y coordinación durante los procedimientos judiciales de Suriname en foros regionales e internacionales con respecto a violaciones de los derechos humanos; apoyo al representante constitucional de la República de Suriname —el Fiscal General del Alto Tribunal de Justicia y los expertos externos nombrados por el Presidente de la República o por el Ministro de Justicia y Policía— durante las actuaciones en los foros regionales e internacionales; tareas de preparación y coordinación durante la redacción de los informes nacionales de Suriname, en particular con respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y asesoramiento a los organismos y funcionarios gubernamentales con respecto a las cuestiones relativas a los derechos humanos.

174. El 27 de agosto de 2007 se enmendó la Ley de Acusación contra Personas que ocupan Cargos Políticos (SB 2001 N° 72). Antes de esta enmienda, la ley que había sido aprobada en 2001 no permitía apelar contra una decisión del Tribunal Administrativo, lo cual contravenía el derecho de apelación (art. 14, párr. 5 del Pacto). Con arreglo a esta ley enmendada, las personas que ocupan cargos políticos pueden interponer un recurso. Entre 2003 y 2013 se adoptaron varias leyes para mejorar la protección de varios derechos humanos específicos. Al respecto, puede hacerse referencia a: i) Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica (20 de junio de 2009, SB 2009 N° 84); ii) Decreto del Ministro de Justicia y Policía de 13 de septiembre de 2010, N° 5811/10, que establece formas de luchar contra la violencia doméstica (SB 2010 N° 150); iii) Decreto de Enmienda del Decreto del Ministro de Justicia y Policía de 13 de septiembre de 2010, N° 5811/10, que establece formas de luchar contra la violencia doméstica (SB 2011 N° 103); iv) Ley de Tipificación del Acoso como Delito (Ley de 27 de abril de 2012, que establece normas contra el acoso y que enmienda el Código Penal (SB 2012 N° 70); v) enmiendas del Código Penal con respecto al delito de abusos deshonestos; Ley de 20 de febrero de 2008, que enmienda con mayor detalle el Código de Procedimiento Penal (SB 2008 N° 21) (revisión de la licitud de la detención ordenada por el juez de instrucción); vi) Ley del Personal; vii) legislación laboral; viii) Decreto sobre los Trabajos Peligrosos y los Jóvenes (SB 2010 N° 175); ix) Ley Electoral; x) Ley del Personal; xi) normativa laboral; xii) Ley de 20 de febrero de 2013, que establece normas para limitar el consumo de tabaco y de sus productos (Ley del Tabaco) (SB 2013 N° 49); xiii) Ley de la Vivienda (Ley de 28 de noviembre de 2012, relativa a la elaboración del Plan de Viviendas para el período 2012 a 2017, publicada el 28 de noviembre de 2012); y xiv) Ley de Organización y Composición del Poder Judicial de Suriname, enmendada el 31 de marzo de 2009 (*Boletín Oficial* de la República de Suriname 2009, N° 3).

175. Para concluir con el artículo 2, el Estado solicita al Comité que considere el informe nacional de 2003 sobre la aplicación del Pacto (cap. II.3, art. 2 del Pacto) como parte integral del presente informe.

Artículo 3

Igualdad de derechos de hombres y mujeres

176. La Oficina de Política de la Mujer y el Niño (BKV) fue creada el 8 de marzo de 2007 en el ámbito del Ministerio de Justicia y Policía para coordinar las políticas relativas a las mujeres y los niños. Según consta en el *Boletín Oficial* de la República de Suriname 2008 N° 137, se han confiado a dicha oficina las siguientes tareas: 1) formular políticas con respecto a las cuestiones que atañen a la mujer y el niño; 2) elaborar un plan de acción relativo a la política de la mujer y el niño para el Ministerio de Justicia y Policía;

3) coordinar la política de la mujer y el niño de todos los departamentos competentes de dicho ministerio; 4) cooperar intensamente con las ONG dedicadas a la mujer y el niño; 5) funcionar como centro de enlace para los asuntos de la mujer y el niño en el ámbito del Ministerio de Justicia y Policía; 6) coordinar las actividades relativas a las obligaciones en virtud de tratados relativas a la mujer y el niño que correspondan a la competencia de dicho ministerio; 7) velar por la aplicación de respuestas efectivas a las preocupaciones específicas del sector considerado, como por ejemplo la violencia doméstica; 8) participar en seminarios nacionales e internacionales sobre cuestiones relativas a la mujer y el niño; 9) organizar la formación de los grupos en los que se centra la política; y 10) organizar en el plano nacional programas de sensibilización sobre la mujer y el niño.

177. En lo relativo a la política de género, el Ministerio de Justicia y Policía lleva a cabo un proyecto sobre la violencia doméstica y un proyecto para hacer frente al acoso sexual en el puesto de trabajo.

178. Para dar aplicación a la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica, el Ministerio de Justicia y Policía ha capacitado a jueces, fiscales, trabajadores sociales del ministerio y personal de la fuerza policial para la interpretación y aplicación de la ley. Está en curso el establecimiento de una dependencia de asesoramiento al delincuente para orientar a los autores de actos de violencia doméstica en el proceso de modificar su conducta.

179. Ya funcionan dos oficinas que brindan asistencia en los distritos de Paramaribo y Nickerie a las víctimas de violencia (en particular, la violencia doméstica), delitos sexuales y otros delitos y a los supervivientes de un intento de suicidio. Se prevé establecer varias líneas telefónicas directas. Actualmente se está procurando contratar a un consultor para llevar a cabo un estudio sobre la necesidad de servicios de líneas telefónicas directas para las comunidades indígenas y cimarronas. El Estado también ha de contratar a un consultor para que prepare un formulario normalizado de registro de incidentes de violencia doméstica. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El Ministerio de Justicia y Policía está resuelto a continuar los programas de concienciación. A la espera del establecimiento de la dependencia de asesoramiento al delincuente, dicho ministerio contrató a dos trabajadores sociales de la fundación Stop Violence against Women para brindar servicios de orientación a quienes cometen actos de violencia doméstica.

180. La Oficina Nacional de Política de Género del Ministerio del Interior ha informado acerca de la realización de las siguientes actividades en el marco de la violencia doméstica en 2012:

- Un taller en el distrito de Nickerie con el objetivo de desvelar y debatir las diferentes percepciones sobre la cuestión de la violencia doméstica que existen en dicho distrito.
- En el contexto del Día Internacional de la Niña, celebrado el 11 de octubre, se realizó una función teatral sobre el tema de la violencia doméstica en el distrito de Nickerie para los estudiantes de la escuela secundaria Voortgezet Onderwijs Junioren (VOJ) y de la institución de enseñanza terciaria Voortgezet Onderwijs Senioren (VOS).
- Se difundió un programa de televisión en el cual los líderes religiosos de seis de los diez distritos expusieron ante la nación su posición sobre la violencia contra la mujer. El programa se difundió del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2012 como parte del proyecto "16 Días de activismo contra la violencia de género".
- Se cursaron pedidos a todos los canales de televisión para que difundieran películas con el tema de la violencia contra la mujer como parte del proyecto "16 Días de activismo contra la violencia de género", que se llevó a cabo del 25 de noviembre al

10 de diciembre de 2012. Su objetivo era aumentar el conocimiento de esta cuestión a través de este medio de comunicación.

- Se organizó un certamen de ensayos entre estudiantes de diversas escuelas VOS en los distritos de Paramaribo y Wanica sobre el tema: "De la paz en el hogar a la paz en Suriname: protesta y pon fin a la violencia contra la mujer", en el contexto del proyecto "16 Días de activismo contra la violencia de género", que se realizó del 25 de noviembre al 10 de diciembre de ese año.
- En el mismo período se realizó un certamen de dibujo sobre dicho tema para estudiantes del nivel VOJ en el distrito de Nickerie.
- Tuvo lugar una representación teatral el 30 de noviembre de 2012 en el distrito Wanica con el tema "La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos" para sensibilizar a la sociedad surinamesa, en particular a la población del distrito de Wanica, en el contexto del proyecto "16 Días de activismo contra la violencia de género", el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Día Internacional de los Derechos Humanos.
- Se llevó a cabo el proyecto "Información sobre la violencia doméstica en las escuelas VOS" en colaboración con la Fundación Stop Violence against Women. Como resultado de este proyecto, se ha capacitado entre abril y agosto de 2013 a 100 clérigos remunerados para luchar contra la violencia doméstica y para detectar casos de este fenómeno.

Acoso sexual en el lugar de trabajo

181. El Ministerio de Justicia y Policía participa en el proyecto "Enfoque preventivo del acoso sexual en el puesto de trabajo en Suriname" de la Fundación Ilse Henar Hewitt Legal Assistance for Women. En relación con este proyecto se creó oficialmente un grupo de trabajo ministerial integrado por representantes de todos los departamentos de dicho ministerio. Este proyecto está todavía en ejecución.

182. En el sector público existen importantes instituciones dirigidas por mujeres. La presidencia y la vicepresidencia del órgano legislativo supremo del Estado, la Asamblea Nacional, están ocupadas por mujeres. El Alto Tribunal de Justicia de Suriname tiene una presidenta interina. Además de los cargos más elevados, las mujeres están ocupando cada vez más puestos de importancia estratégica dentro del sector público. Por ejemplo, el Alto Tribunal de Justicia está integrado por 10 mujeres y 6 hombres. El ministerio público está compuesto por 15 mujeres y 6 hombres. La Dirección del Banco Nacional de Desarrollo está a cargo de una mujer. La presidencia y la vicepresidencia de la Asamblea Nacional están ocupadas por mujeres. También en el sector privado las mujeres tienen cada vez más influencia. Suriname todavía tiene un largo camino que recorrer, y el Estado se ha comprometido a lograr la igualdad de género en todas las profesiones y oficios.

183. El Estado ha detectado algunos obstáculos al pleno goce de los derechos y libertades fundamentales. Por consiguiente, se está preparando para afrontar adecuada y eficazmente dichos obstáculos, que pueden describirse como:

- Conocimiento insuficiente de la sociedad sobre la existencia y disponibilidad de recursos legales;
- Escasez de trabajadores sociales en los departamentos ministeriales;
- Estructura jerárquica ineficiente en los ministerios;
- Burocracia gubernamental anquilosada.

184. Para concluir con el artículo 3, el Estado se remite a los párrafos 48 a 52 del presente informe y al informe nacional de 2003 sobre la aplicación del Pacto (cap. II.4, art. 3 del Pacto) como parte integral del presente informe, puesto que la información en él suministrada sigue siendo válida.

Artículo 4

Emergencia pública proclamada oficialmente por los Estados partes

185. La emergencia pública está regulada en el artículo 23 del capítulo V, el artículo 102 del capítulo XII y los artículos 128, 129 y 130 del capítulo XIV de la Constitución.

186. El artículo 128 dice: "Se establecerá un Consejo Nacional de Seguridad, que podrá comenzar sus actividades solo después de que las instituciones debidamente autorizadas hayan decidido declarar el estado de guerra o amenaza de guerra o el estado de sitio en caso de agresión militar, o el estado de emergencia civil y militar"²¹. Las instituciones autorizadas son: el Presidente, el Vicepresidente, el ministro a cargo de asuntos jurídicos, el ministro a cargo de la defensa, otro miembro del Consejo de Ministros, el Comandante del Ejército Nacional y el Jefe del Cuerpo de Policía de Suriname (art. 129). En el período transcurrido desde el segundo informe nacional hasta agosto de 2013, la República de Suriname no se ha encontrado en estado de guerra o amenaza de guerra ni en estado de sitio. El Estado también se remite al párrafo 47 del presente informe.

Artículo 5

Interpretación del Pacto de manera que no sea contraria a sus objetivos

187. La Constitución de la República de Suriname se ajusta al artículo 5 del Pacto. No existen normas, fallos ni decisiones de las autoridades gubernamentales en los que se hayan interpretado las disposiciones del Pacto en forma contraria a sus objetivos. En este contexto, el Estado se remite al informe nacional de 2003 sobre la aplicación del Pacto (cap. II.6, art. 5 del Pacto) y solicita al Comité que lo considere como parte integral del presente informe, puesto que la información en él suministrada sigue siendo válida.

Artículo 6

El derecho a la vida

188. Con respecto al derecho a la vida y lo ocurrido durante el régimen militar en los años ochenta, el Estado ha proporcionado más arriba la información pertinente al Comité, en los párrafos 40 a 46 del presente informe, relativos al derecho a la vida y la prevención de la tortura.

189. No se han registrado casos de ejecuciones extrajudiciales ni de desapariciones forzadas entre 2003 y la fecha actual. Suriname es ahora una república democrática, con una Constitución adoptada por su pueblo mediante referéndum, y su órgano legislativo supremo —la Asamblea Nacional— es elegido en comicios libres, limpios y secretos.

190. El Estado ha logrado un mejoramiento considerable de la sanidad pública y una notable reducción del número de casos anuales de VIH, sida y tuberculosis. El reto que enfrentamos ahora consiste en reducir el número de casos de enfermedades no transmisibles, que constituyen una amenaza para el país.

²¹ Subrayado añadido.

191. Con respecto a las tasas de natalidad y embarazos, un estudio indica que en la región del Caribe Suriname tiene el número más elevado de madres adolescentes. Se calcula que entre el 15% y el 17% de los aproximadamente 1.500 partos registrados anualmente corresponden a niñas adolescentes. Estas cifras indican que, como promedio, de cada 100 niños que nacen, 16 son de madres adolescentes. La legislación, la política y la práctica relativas al acceso de las adolescentes embarazadas a las instituciones educativas todavía no se han simplificado. Aunque no existen obstáculos legales que impidan el ingreso de niñas embarazadas a la escuela —y el Ministerio de Educación ha declarado públicamente que está prohibido hacerlo—, en la práctica ello ocurre en algunos lugares. Se debate permanentemente esta cuestión con los principales interesados, en particular con la agrupación de directores de escuelas de los grados 7 a 10. Los argumentos más frecuentes a favor de la prohibición son los valores y las normas morales. En algunas instituciones educativas, las adolescentes embarazadas tienen la oportunidad de visitar la escuela hasta el último día del embarazo y no se las expulsa como ocurría anteriormente. Pueden volver a la escuela después de dar a luz (se trata de algo parecido a una licencia por embarazo). Se están elaborando programas para orientar a las madres adolescentes a fin de que puedan volver a la escuela o convertirse en jóvenes emprendedoras que puedan tener capacidades y oportunidades de ser autónomas. En estos casos, un reto que se plantea a Suriname es ofrecer la orientación adecuada en la escuela a los padres y madres jóvenes.

192. Algunas otras cuestiones que afectan al derecho a la vida son los abortos ilegales, los delitos sexuales, la violencia contra los niños y el trabajo infantil. Alrededor del 10% de los niños de entre 5 y 14 años de edad están involucrados en el trabajo infantil (9,6%)²². Estos problemas serán abordados, al igual que una buena atención sanitaria para los ciudadanos, en la política del Estado. A partir del 1 de julio de 2013, unos 100.000 ciudadanos de entre 0 y 16 años y otros 30.000 de más de 60 años tendrán derecho al seguro sanitario. El 1 de enero de 2014 comenzará a funcionar el sistema nacional de atención sanitaria. Los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno y sus familiares a cargo están excluidos de este seguro porque ya están asegurados por el Staats Zieken Fonds (seguro estatal de salud). Los progenitores que ya cuentan con un seguro privado podrán elegir a qué seguro desean acogerse.

193. El Código Penal se refiere a algunas formas específicas de violencia contra el niño y tipifica y sanciona actos como el infanticidio (art. 351); el homicidio infantil (art. 350); la participación en estos delitos (art. 352), y el aborto (art. 355). En Suriname no se conocen casos de infanticidio de niñas ni de los llamados homicidios por motivos de honor. En 2012 y 2013 se han registrado asesinatos como resultado de la violencia doméstica. Uno de los asesinos se suicidó, y los demás están procesados o han sido condenados. El Estado considera que el problema de la violencia doméstica es una cuestión grave y lleva a cabo una política enérgica contra este fenómeno.

194. Para concluir con el artículo 6, el Estado se remite a los párrafos 53 a 62 del presente informe.

Artículo 7

Prevención de la tortura

195. Suriname considera que la tortura es una cuestión que exige toda la atención necesaria. En el artículo 9 del capítulo V, relativo a los derechos y libertades individuales fundamentales, la Constitución establece categóricamente la prohibición de la tortura física y mental.

²² Investigación de MICS Surveys, párrs. 8.2, 8.3 y 8.4.

196. En el sector público hay varias instituciones con facultades para aplicar la ley. Debido a esta circunstancia, se ha promulgado legislación para proteger a la sociedad del abuso de dichas facultades, o sea de actos ilícitos como la tortura. También se han establecido mecanismos para responder a los casos de maltrato de ciudadanos. Un ejemplo de tales mecanismos es la división Meldpunt Politie Optreden del Ministerio de Justicia y Policía. En este departamento, los ciudadanos pueden presentar denuncias contra malos tratos recibidos de los agentes del orden público. Todas las denuncias que se presentan son investigadas. En caso de que la denuncia esté justificada, la Fiscalía General tiene competencia para seguir investigando la cuestión. Pueden encontrarse ejemplos de protección jurídica de los detenidos y reclusos en el artículo 21 (1) de la Ley Militar y en el artículo 25 de la Ley Penitenciaria.

197. Entre 2009 y 2013 ha habido casos en que agentes policiales actuaron con excesiva violencia contra civiles. Estos funcionarios fueron enjuiciados y sancionados a raíz de las investigaciones penales. En 2008, tres agentes de policía realizaron disparos en dirección de un mango en el que un hombre robaba fruta. A pesar de recibir órdenes repetidas, esa persona no se bajó del árbol y fue alcanzado por uno de los disparos. Los tres agentes quedaron en detención policial y fueron enjuiciados. En 2012 se produjo el caso de un transeúnte que fue herido mortalmente por un recluta policial que efectuó un disparo de advertencia. Este agente trataba de llevarse a un civil que era atacado por una muchedumbre agresiva. Los agentes de policía que intentaron proteger y llevarse a ese civil también fueron atacados, y el recluta mencionado fue golpeado en la cabeza. Todo el incidente fue filmado por periodistas y registrado por cámaras de seguridad. El recluta policial fue acusado de homicidio culposo y enjuiciado, y resultó absuelto por el tribunal. Actualmente hay dos agentes de policía procesados en un caso muy grave en el que abusaron de sus funciones y detuvieron ilegalmente a un hombre. En el momento de la detención robaron sus joyas, y al día siguiente el cadáver del detenido fue encontrado en un arcén con varios disparos en la cabeza. Esos agentes de policía están acusados de asesinato.

198. El Estado procura promover el conocimiento de los derechos humanos por parte de los oficiales de las fuerzas armadas. En el programa de estudios para la capacitación de la policía, del que participan los miembros de la policía militar, y también en la formación de los funcionarios penitenciarios, se incluye un curso sobre derechos humanos.

199. Para concluir con el artículo 7, el Estado se remite a los párrafos 56 a 62 del presente informe.

Artículo 8

La esclavitud

200. La prohibición de la esclavitud figura en el artículo 15 de la Constitución de Suriname. El Código Penal (en su título XIV, relativo a los abusos deshonestos, arts. 307 y ss., y en su título XVIII, relativo a los delitos contra la libertad personal, arts. 334 y ss.) sanciona los actos relacionados con cualquier forma de esclavitud. La pena máxima es de 20 años.

201. Además de esa prohibición, el Código Penal establece también las sanciones penales que se aplicarán a los delitos vinculados con la esclavitud. Dicho código prevé, junto al encarcelamiento, la medida adicional del envío del condenado a una institución de trabajo del Estado, de conformidad con el artículo 9.1.b.2º. En la práctica, esta pena (realización de trabajos o prestación de servicios) ha dejado de aplicarse.

202. El Estado se remite a los párrafos 63 a 69 del presente informe, en los que ya ha explicado en detalle la prohibición de la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud.

Artículo 9

Derecho a la libertad y a la seguridad personales

203. El derecho a la libertad y a la seguridad personales está garantizado en el artículo 16 de la Constitución. Numerosas disposiciones del Código Penal y otras disposiciones penales de diversas leyes garantizan este derecho. El delito y la violencia son las amenazas críticas a la seguridad de las personas. La inseguridad limita la capacidad de la gente para ejercer su libertad de elección y su autonomía.

204. La Ley sobre el Acoso aprobada en 2012 también contiene disposiciones que garantizan el derecho a la libertad y a la seguridad y que funcionan en la práctica. Para ilustrarlo, se han anexado al presente informe al Comité dos artículos periodísticos del *Times of Suriname* en inglés, fechados respectivamente el 24 y el 30 de agosto de 2013. En el Anexo 6 se muestra que los jueces reciben todos los días muchos pedidos de órdenes de alejamiento²³ y en el Anexo 7 se informa de la detención de un acosador por la policía²⁴.

205. El derecho a la libertad puede restringirse lícitamente. De conformidad con el artículo 9 del Código Penal, el encarcelamiento y la detención son las principales penas. La pena máxima por la comisión de un delito es la prisión perpetua, que puede convertirse en un período temporal de hasta 20 años. En algunos casos, la detención no puede exceder de ninguna manera un año de duración.

206. Para facilitar la comprensión de la cuestión de la privación lícita del derecho a la libertad, se presentan en el Anexo 9 las estadísticas relativas a las personas privadas de libertad en aplicación del Código Penal²⁵.

207. Con respecto a otros casos en que puede privarse de libertad a las personas contra su voluntad pero de manera lícita, se puede hacer referencia al Centro Psiquiátrico de Suriname. El ingreso en esta institución solo puede hacerse en virtud de la Ley sobre la Demencia. En el derecho penal, el ingreso en un hospital psiquiátrico solo es posible por orden judicial como condición especial de la sentencia, y la permanencia en el establecimiento no excede de un año. Suriname no cuenta con clínicas de desintoxicación. Los adictos pueden residir voluntariamente en albergues con el propósito de abandonar la adicción. Los vagabundos no son ubicados en instituciones. En virtud de la Ley de Extranjería, los inmigrantes ilegales pueden ser detenidos como extranjeros en espera de su expulsión.

208. Con respecto a los requisitos de la detención policial y la prisión preventiva y la duración máxima de la detención, el Estado se remite a los párrafos 77 a 82 y 96 relativos al trato de los reclusos y otros detenidos, a la libertad y la seguridad personales y al derecho a un juicio imparcial, y que contienen también información con respecto a la incomunicación.

209. Entre 2010 y 2013 el Estado ha mitigado las necesidades de algunas de las personas más menesterosas. Las prestaciones generales de pensiones fueron aumentadas dos veces, y el subsidio general se ha multiplicado por 10. Se ha emprendido un programa de viviendas que, aunque sufre retrasos, continúa en marcha y ya ha ayudado a muchas personas a tener un hogar. Muchas zonas que carecían de electricidad y de agua potable limpia y segura cuentan ahora con estos servicios. Está en marcha la primera etapa del Sistema Nacional de Salud y el año próximo se hará realidad el Sistema General de Pensiones. Todos los niños

²³ Véase en el Anexo 4 el artículo periodístico relativo a las órdenes de alejamiento.

²⁴ Véase en el Anexo 5 el artículo periodístico relativo a la violación de una orden de alejamiento, con su traducción.

²⁵ Véase en el Anexo 3 la lista anual de detenidos, desde 2003 hasta 2012, publicada por la Oficina General de Estadística de Suriname.

de menos de 16 años y los ciudadanos de edad (a partir de los 60 años) tienen ahora derecho al seguro sanitario gratuito²⁶.

210. El Gobierno tiene la responsabilidad de formular legislación sobre las condiciones de los establecimientos y las ONG para el cuidado de la salud y sobre el estatuto del personal que trabaja en ellos. Solo se permite cuidar a los pacientes en estas instituciones a personas que cuentan con las cualificaciones exigidas por la ley. El Gobierno controla la calidad de la atención y verifica las cualificaciones de los profesionales mediante distintas inspecciones. Los institutos educativos también son inspeccionados por el Gobierno, y sus programas de estudio deben permitir al personal la adquisición de las competencias necesarias. El director sanitario es el Director del Servicio Médico y está facultado por la ley para adoptar todas las medidas necesarias cuando la salud de un ciudadano o de un grupo de personas, cualquiera sea su edad, esté en situación de riesgo.

211. El cuidado de las personas mayores con enfermedades crónicas está a cargo de los hospitales, el centro psiquiátrico, los hogares de ancianos, las ONG que brindan atención en el hogar y las instalaciones sanitarias primarias. No obstante, el Ministerio de Salud tiene el deber de supervisar y vigilar, mediante su servicio de inspecciones, las condiciones, instalaciones y entorno de las instalaciones y la condición del personal que presta los cuidados, y está autorizado para adoptar todas las medidas necesarias.

212. Algunos de los retos en este ámbito son: el programa de construcción de viviendas sufre atrasos, la educación es insuficiente y tiene que adaptarse al espíritu del tiempo, y una atención sanitaria de alta calidad requiere muchos esfuerzos para que sea accesible y asequible para todos²⁷.

213. Con respecto a la salud pueden mencionarse algunas preocupaciones y problemas particulares:

- El alcoholismo. Las personas que proporcionan cuidados en la atención sanitaria primaria deben tener formación para brindar enseñanza y asesoramiento sanitarios en sus establecimientos o en la comunidad con respecto a esta cuestión.
- Los ancianos con enfermedades psiquiátricas.
- Las condiciones de vida. Algunas personas de edad viven en malas condiciones, y algunos hogares de ancianos tienen listas de espera. Algunas personas de edad no cuentan con los medios necesarios para pagar los costos.
- Los ancianos que viven solos.
- Los reclusos de edad avanzada²⁸.

214. Todas las mujeres embarazadas reciben algún tipo de cuidado prenatal, y el 90% de los nacimientos ocurren en instalaciones de salud atendidas por personal sanitario competente. Con todo, el alto índice de mortalidad materna es motivo de preocupación. La capacidad nacional para la atención obstétrica de urgencia así como el sistema de registro, en particular con respecto a la investigación de los casos de mortalidad materna, necesitan ser fortalecidos para mantener la tasa de mortalidad al nivel más bajo posible. Con el fin de alcanzar este objetivo, Suriname llevó a cabo en 2010 la Evaluación de Necesidades para una Maternidad Segura. El Plan de Acción para una Maternidad Segura también incluye actividades en la esfera de la mortalidad infantil.

²⁶ Presidente Desi Bouterse, testamento político orientado a 2015, Ley de Información, información actualizada, *De Ware Tijd*, lunes 12 de agosto de 2013.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Fuente: Departamento de Cuidados Sanitarios en el Hogar del Ministerio de Salud.

215. Con respecto a la mortalidad y la morbilidad, la atención sanitaria de los adolescentes y los jóvenes debe centrarse en los comportamientos de riesgo de los adolescentes de 10 a 19 años y de los jóvenes hasta los 24 años de edad: prácticas sexuales de riesgo, que tienen como consecuencia los embarazos no deseados, la contracción de enfermedades sexualmente transmisibles (en particular, el VIH), la adicción a drogas, la violencia y las lesiones físicas. El Ministerio de Salud ha elaborado el Plan del Sector de la Salud, que ha de proporcionar el marco general para la planificación sanitaria estratégica a corto y largo plazo en el período 2011-2018. En esto se basa la filosofía del Gobierno de centrarse en el fortalecimiento del sistema sanitario para brindar una mayor prevención de las enfermedades (*fuentes*: Ministerio de Salud).

216. La Junta Nacional para las Personas con Discapacidad, establecida en los años ochenta, asesora al Gobierno sobre la política con respecto a estas personas. El Comité de Política para las Personas con Discapacidad formuló un plan de política para el período 2005-2010 destinado al Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda e inspirado en las disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y otras convenciones sobre los derechos humanos y en el Plan Plurianual de Desarrollo. No todas las actividades que figuran en la política se han llevado a cabo, y los servicios se refuerzan cuando es necesario. También hay centros de coordinación establecidos en los ministerios competentes a los que incumbe la aplicación de la política sobre las personas con discapacidad. Está en marcha el proceso de creación de un fondo solidario para las personas con discapacidad. Actualmente se están realizando preparativos para que Suriname se convierta en Estado parte en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Un proyecto de ley en la materia está a consideración del parlamento y ha de seguir el proceso legislativo para su aprobación.

217. En las consultas con la Plataforma LGBT Suriname para la redacción del presente informe, esta organización declaró que no consideraba que la Constitución bastara para prevenir la discriminación contra las personas LGBT. Dicha plataforma afirmó explícitamente que debía enmendarse el artículo 8.2 de la Constitución para que estableciera explícitamente que se prohibiría la discriminación contra las personas por motivo de su diferente orientación sexual. Sin embargo, el Estado considera que la legislación actual brinda suficientes salvaguardias contra la discriminación de cualquier persona o grupo de personas y protege también los derechos de los LGBT. En la legislación surinamesa actual no figura ninguna norma discriminatoria. En la práctica no se ha comunicado ni registrado ningún caso de discriminación por motivo de la orientación sexual. La Constitución fue adoptada mediante referendo por el pueblo de Suriname y hasta el momento no han existido casos que requieran una enmienda legislativa. Los derechos de los LGBT no son conculcados.

Artículo 10

Trato humano de las personas privadas de libertad

218. Los derechos fundamentales del individuo físicamente privado de su libertad figuran en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Constitución. Las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y la legislación relativa al encarcelamiento rigen el trato y los derechos de las personas privadas de libertad.

219. Con respecto al derecho a un trato humano de las personas privadas de libertad, debe observarse que se ha realizado un importante progreso en materia carcelaria en Suriname, como la reciente inauguración de centros de detención que cuentan con todas las instalaciones y servicios necesarios. En general, las estructuras físicas y las condiciones de alojamiento de las prisiones son buenas, y el número de reclusos no alcanza su capacidad máxima. La seguridad y la gestión internas de los establecimientos carcelarios están a cargo

de un cuerpo de funcionarios penitenciarios asignados específicamente al cumplimiento de esas tareas.

220. La atención y los servicios que se prestan a los detenidos y los reclusos varían desde terapias laborales hasta un trabajo que puede o no ser de carácter técnico. También se realizan actividades deportivas. En las cuatro prisiones se brindan cuidados médicos. Hay un médico asignado que realiza visitas y consultas semanales a los detenidos y los reclusos. Los casos urgentes son ingresados en el Departamento de Urgencias del Hospital Universitario, y los casos en que se requiere atención especializada son derivados a los profesionales de la rama idónea. Los derechos de los prisioneros están garantizados en la forma establecida en las leyes pertinentes. Los detenidos y los reclusos pueden mantener correspondencia con sus familias y con las autoridades. Son aplicables las medidas penitenciarias.

221. Para concluir con el artículo 10, el Estado se remite a los párrafos 70 a 94 del presente informe.

Artículo 11

Encarcelamiento por el no cumplimiento de una obligación contractual

222. En Suriname el incumplimiento de un contrato no puede ser motivo de encarcelamiento. Los tribunales se ocupan de los casos relativos al cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de incumplimiento son de aplicación el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. En la práctica el Fiscal General, que es el jefe del ministerio público responsable de las investigaciones (art. 145 de la Constitución) y que supervisa la correcta ejecución de las tareas policiales (art. 147 de la Constitución), se cerciora de que ningún caso civil sea investigado penalmente y de que nadie sea detenido por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Los artículos 465, 466 y 467 del Código de Procedimiento Civil se refieren al encarcelamiento por desacato a una orden judicial. El Estado también se remite a su último informe nacional al Comité en 2003 (cap. II.12, art. 11 del Pacto), puesto que la información suministrada en dicho informe mantiene su validez.

Artículo 12

Derecho a circular libremente y a escoger su residencia

223. La legislación nacional del Estado guarda conformidad con las disposiciones del artículo 12 del Pacto (art. 3(2) de la Constitución). La normativa mencionada en el segundo informe sigue vigente y no se han adoptado nuevas leyes que pudieran vulnerar este derecho.

224. En la práctica, el juez puede decidir en una sentencia interlocutoria que el acusado se registre periódicamente durante el procedimiento y que comparezca en las vistas. Ello se basa en la normativa nacional (art. 70 del Código de Procedimiento Penal).

225. El Estado reconoce que miles de personas, en particular mujeres y niños, que se desplazaron a las ciudades desde el interior del país viven en condiciones de marginación y privación. Reconoce también que existe una gran disparidad en el desarrollo del país entre las zonas urbanas, rurales y del interior. Uno de los retos que enfrenta actualmente es la elaboración de una política sostenible en materia de residencia y movilidad de la población.

226. El Estado se propone regular el marco jurídico y de políticas con el fin de facilitar la libre circulación de las personas en el territorio del país, así como su ingreso y egreso. Al

respecto rige la Ley de Extranjería. En el ámbito de la CARICOM existe abundante normativa con respecto a la libre movilidad de funcionarios públicos, trabajadores y estudiantes. Los ciudadanos de la CARICOM pueden entrar al país sin visado, circular libremente por el territorio de Suriname y salir del país. Deben obedecer las leyes y poseer los documentos adecuados, como por ejemplo un pasaporte. Además deben ingresar en el país de manera correcta. Lo mismo vale para los diplomáticos y ciudadanos de los países a los que no se exige visado por existir un acuerdo en ese sentido. Los demás extranjeros deben poseer los documentos de viaje y permisos de residencia adecuados y, si desean trabajar, también necesitan un permiso de trabajo.

227. El Estado se remite asimismo a su último informe nacional de 2003 al Comité (cap. II.13, art. 12 del Pacto). La información que figura en dicho informe continúa vigente.

Artículo 13 **Expulsión de extranjeros**

228. Con respecto a la expulsión de extranjeros, el Estado se remite a su último informe nacional de 2003 al Comité (cap. II.14, art. 13 del Pacto), puesto que la información suministrada en dicho informe sigue siendo válida. No se han producido cambios importantes en la legislación ni en la política nacionales. Sin embargo, sobre la base de una decisión normativa del Ministerio de Justicia y Policía, en los años 2010 y 2011 se dio a los extranjeros en situación ilegal la oportunidad de registrarse con el fin de regularizar su situación.

Artículo 14 **Derecho a un juicio con las debidas garantías, presunción de inocencia, derechos de los acusados, indemnización y *ne bis in idem***

229. El Estado se remite a sus informes nacionales inicial (1979) y segundo (2003) sobre la aplicación del Pacto. La información proporcionada en dichos informes sigue teniendo validez. Véanse también los párrafos 70 a 94 del presente informe sobre el trato de los reclusos y otros detenidos, la libertad y la seguridad personales y el derecho a un juicio con las debidas garantías.

Artículo 15 **No retroactividad de la legislación relativa a la responsabilidad penal**

230. El Estado se remite a sus informes nacionales inicial (1979) y segundo (2003) al Comité. No ha habido cambios en la legislación penal nacional que no se hayan ajustado al Pacto. Sin embargo, actualmente hay un caso pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la interpretación y aplicación del derecho penal por dicho tribunal. El peticionario impugna la aplicación retroactiva de la Ley de Acusación contra Personas que ocupan Cargos Políticos, de 18 de octubre de 2001, en una causa penal dirigida contra él (*Alibux c. Suriname*), y alega haber sido acusado de actos que, en el momento de su supuesta comisión, no eran delictivos.

Artículo 16**Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica**

231. Como se expuso en el informe nacional de Suriname al Comité en 2003, varios artículos de la Constitución reconocen explícitamente al individuo como persona (véase el capítulo II.17, art. 16, del Pacto en el informe de 2003; la información allí aportada sigue siendo válida).

Artículo 17**No injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada**

232. Este derecho está garantizado en diversos instrumentos legales nacionales, como por ejemplo la Constitución (art. 17), el Código Civil y el Código Penal (arts. 186, 435 y 320 a 325) de la República de Suriname. En el sistema jurídico del país, la policía, el ministerio público y el Alto Tribunal de Justicia son las autoridades competentes para autorizar la injerencia en la vida privada. Los recursos de que dispone el individuo en caso de considerar que se han violado sus derechos protegidos en el artículo 17 del Pacto figuran en el Código Penal y en el Código Civil. En la justicia penal, puede interponerse una denuncia en el Departamento de Investigación del Personal del Cuerpo de Policía de Suriname (OPZ), en la Fiscalía General y ante los investigadores competentes en materia penal. En el derecho civil, puede presentarse una demanda ante el tribunal de distrito. El Estado se remite también a su último informe nacional de 2003 al Comité (cap. II.18, art. 17 del Pacto). No ha habido cambios de importancia en la legislación ni en la política nacionales, y los detalles suministrados en dicho informe siguen teniendo vigencia.

Artículo 18**Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión**

233. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión está consagrado en la Constitución (arts. 18 y 38). Impedir actividades religiosas es un acto delictivo en virtud del Código Penal (arts. 194 y 195). El informe nacional de 2003 al Comité (cap. II.19, art. 18 del Pacto) se refirió exhaustivamente a este derecho, y los detalles en él suministrados siguen siendo válidos.

Artículo 19**Libertad de expresión**

234. La libertad de expresión está garantizada en el artículo 19 de la Constitución. Actualmente la libertad de prensa no está restringida de modo alguno. Las instituciones, las ONG y las organizaciones internacionales colaboran para que la prensa de Suriname sea activa, independiente e imparcial. Se llevan a cabo diversos cursos y talleres en este ámbito. Por ejemplo, en enero de 2013 la Asociación de Periodistas organizó un curso de capacitación de una semana para periodistas en colaboración con el Instituto Internacional de la Prensa y la Association of Caribbean Media Workers (ACM). Asimismo, en febrero de 2013 el Banco Central de Suriname llevó a cabo un curso para periodistas con el propósito de impartir educación financiera a la prensa para que pudiera estar en mejores condiciones de informar sobre esa materia. Esta actividad se realizó en cooperación con el FMI y la agencia de noticias Reuters. Otro ejemplo que demuestra que en la práctica el Estado da importancia al derecho a la libertad de expresión es la comunicación del Ministerio del Interior de que ha de adoptar las medidas necesarias para elaborar legislación

de protección a los denunciantes. Según dicho ministerio, el Consejo de Ministros ha debatido un proyecto de ley sobre la libertad de información²⁹.

235. Un ejemplo de la práctica de la libertad de expresión puede encontrarse en las manifestaciones que tuvieron lugar en 2013 antes de las negociaciones y la adopción de la Ley de Amnistía por la Asamblea Nacional. Algunos segmentos de la sociedad estaban en contra de la ley y realizaron manifestaciones y marchas callejeras cerca del edificio de la Asamblea Nacional durante sus sesiones. Se desprende que el Estado no impide estas manifestaciones.

236. También existen preocupaciones sobre la libertad de expresión. En por lo menos tres oportunidades, personas desconocidas amenazaron a periodistas o a su personal mientras ejercían sus tareas. Las víctimas de estas amenazas presentaron las denuncias correspondientes. No obstante, la investigación penal no logró identificar a los autores. Afortunadamente, los agresores no ejecutaron las amenazas que profirieron. El reto que tiene ante sí el Estado es proteger en esos casos a las víctimas, llevar a cabo una investigación penal y sancionar a los autores. Se está realizando un debate sobre las llamadas leyes mordaza y sobre la modificación del Código Penal para adaptarlo al artículo 19 del Pacto.

237. El Estado se remite a su último informe nacional de 2003 al Comité (párr. II.20, art. 19 del Pacto). No ha habido cambios de importancia en la legislación ni en la política nacionales, y los detalles suministrados en dicho informe siguen teniendo vigencia.

Artículo 20

Prohibición de la propaganda en favor de la violencia

238. En el derecho surinamés, la propaganda de la violencia es punible en virtud de los artículos 175 y 175a del Código Penal. Las organizaciones que promueven la discriminación o la violencia raciales o incitan a ellas no están alcanzadas por dichos artículos del actual Código Penal. Sin embargo, con arreglo al artículo 188 de dicho código está prohibida la participación en organizaciones cuyo objetivo sea de cualquier tipo delictivo. El derecho surinamés no permite el establecimiento de ninguna organización con personería jurídica que no tenga fines lícitos, por ejemplo si busca promover la discriminación racial o incitar a ella. Al respecto, véanse los artículos 1665 a 1684 del Código Civil.

239. Para concluir con el artículo 20, el Estado también se remite a su último informe nacional de 2003 al Comité (cap. II.21, art. 20 del Pacto). La información proporcionada en dicho informe sigue teniendo validez.

Artículos 21 y 22

Libertad de reunión y libertad de asociación (libertad sindical)

240. La legislación nacional del Estado guarda conformidad con los artículos 21 y 22 del Pacto. Se hace referencia a los artículos 20, 21 y 33 de la Constitución.

241. En la práctica, los residentes de Suriname no se ven restringidos en su derecho a la libertad de reunión y a la libertad de asociación. Toda persona puede establecer una asociación u organización, verbigracia una organización de derechos humanos. Al amparo de esta situación, un ciudadano de nombre Robert Hewitt ha anunciado la fundación de una organización de derechos humanos en Suriname. Puede deducirse que el Estado no le ha

²⁹ Véase el Anexo 6, artículo periodístico publicado el 7 de agosto de 2013 en *De Ware Tijd*.

puesto trabas. Tampoco los empleados de empresas ni los funcionarios públicos encuentran obstáculos al establecimiento de sindicatos. Puede mencionarse como ejemplos la Unión de Funcionarios Penitenciarios, la Unión de Funcionarios Policiales, la Unión de Docentes, etcétera.

242. Las protestas manifestadas durante el procedimiento de adopción de la Ley de Amnistía demuestran la libre práctica de los derechos mencionados en el párrafo 214, que trata de la libertad de expresión³⁰.

243. Para concluir con los artículos 21 y 22, el Estado se remite al informe nacional de 2003 al Comité (cap. II.22, arts. 21 y 22 del Pacto). La información que contiene dicho informe sigue vigente.

Artículo 23

La protección de la familia y el matrimonio

244. El principio de la familia como célula natural y fundamental de la sociedad está reconocido en el derecho surinamés. Como se expuso anteriormente en la subsección Protección de los Niños de la sección B, relativa a las respuestas a las principales preocupaciones y recomendaciones formuladas por el Comité durante el examen de anteriores informes, la Ley de Matrimonios Asiáticos fue derogada mediante la Resolución N° 4190/03, de 17 de junio de 2003. La Ley del Matrimonio revisada de 1973, que establecía nuevas normas relativas a la celebración del matrimonio y a su disolución, entró en vigor y a partir del 17 de junio de 2003 no se han celebrado matrimonios con arreglo a la Ley de Matrimonios Asiáticos. Además, se introdujeron modificaciones al título IV del Libro I del Código Civil de Suriname. Si el Comité de Derechos Humanos desea más información, se ruega que se remita al informe nacional de 2003 sobre la aplicación del Pacto (cap. II.23, art. 23 del Pacto), que forma parte integral del presente informe puesto que los datos que contiene siguen siendo válidos.

Artículo 24

Protección del niño

245. El Estado ha abordado la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño como uno de sus mayores desafíos dado que invertir en el niño es invertir en el futuro. En su proceso de aplicación, el Estado busca asociarse con el sector privado, especialmente con las ONG que trabajan con los niños y en favor de ellos.

246. La República de Suriname está comprometida con el bienestar de todos sus niños, especialmente aquellos con discapacidad. El Estado procura lograr este objetivo a través de una alta calidad de la atención sanitaria y una buena educación, que deben ser asequibles para todos. El Estado, entre otras cosas, se compromete a innovar en el sistema educativo para adaptarlo a las necesidades de los niños y a incrementar el número de escuelas. Se han mejorado los servicios sociales, por ejemplo las tarjetas sanitarias para proveer cuidados médicos, el apoyo financiero a los hogares necesitados y a los discapacitados, las asignaciones por hijos, los programas de suministros escolares y las subvenciones a las instituciones de atención a los niños.

³⁰ En 2013, los manifestantes celebraron reuniones de protesta en la ciudad, a partir de las cuales organizaron marchas en la calle y frente al edificio parlamentario durante las negociaciones y la adopción de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional. También pronunciaron discursos. Algunos sectores de la sociedad estaban en contra de la ley. Puede inferirse que el Estado no impidió estas actividades.

247. La educación irá acompañada de actividades extraescolares de calidad. Este proyecto se encuentra actualmente en una fase de experimentación y seguirá elaborándose durante el nuevo año lectivo. La educación es ahora accesible para todos los niños. Las tasas de matrícula han sido abolidas. Esto vale también para los niños del interior del país. Las oportunidades para que estos niños estudien en la ciudad han aumentado. A causa de que el número de habitantes por aldea es bajo y que estos pueblos están dispersos, es imposible proporcionar una educación superior en el interior del país. En el interior el transporte escolar (en barco y autobús) está bien organizado y es gratuito.

248. Si bien Suriname no es parte en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, el Estado actúa de conformidad con el artículo 22 de esta Convención. Además, el departamento competente proporciona acceso a la educación básica, puesto que los padres de los niños que no tienen la nacionalidad surinamesa deben matricular a sus hijos. Estos niños reciben el mismo trato que todos los demás. Sin embargo, aparece una diferencia en las escuelas privadas en cuanto al costo de la matrícula.

249. Suriname siempre ha dado mucha importancia a la juventud. Un Departamento de Deporte y Asuntos de la Juventud fue establecido en 2010 y se han hecho esfuerzos a fin de formular una política nacional para la juventud encaminada a aliviar las necesidades de los jóvenes. El Programa del Embajador de la Juventud de la CARICOM y el Parlamento de la Juventud Surinamesa han servido para fortalecer la capacidad de liderazgo. El Estado promueve el liderazgo de los jóvenes para asegurar su plena participación en la política y en los procesos de adopción de decisiones.

250. La primera fase del Sistema Nacional de Salud se ha puesto en marcha. Todos los niños menores de 16 años tienen derecho a un seguro gratuito. Entre 2003 y 2013 las ayudas generales a los niños se decuplicaron, y es objetivo del Estado duplicar ese monto. Las ayudas se conceden hasta a cuatro hijos por familia en Suriname, y el ministerio competente ha elaborado una resolución conceptual en la que no se ha incluido el máximo de cuatro niños. Estas prestaciones se aplican también a los niños del interior.

251. Para los casos de abusos sexuales contra niños, el Gobierno estableció un grupo de trabajo interdepartamental que coordina la protección jurídica, social y sanitaria de estos niños (Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda: División de Atención a la Juventud y División de Acción Social General; Ministerio de Justicia y Policía: Oficina de Asuntos de la Familia, y Cuerpo de Policía de Suriname: Departamento de la Juventud; Ministerio de Salud: Oficina de Salud Pública y Salud de la Familia). En el ámbito de sus responsabilidades, estas instituciones deben adoptar las medidas necesarias. De este modo, el Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda es responsable de los servicios médicos a los niños y de la orientación de estos por ayudantes de familia que evalúan la situación del hogar y determinan qué ayuda especializada debe prestarse.

252. Actualmente se encuentra pendiente ante la Asamblea Nacional el proceso de adopción de una ley de centros de acogida, especialmente para niños.

253. Para concluir con el artículo 24, el Estado se remite a su último informe nacional al Comité del año 2003 (cap. II.24., art. 24 del Pacto). Los detalles que contiene ese informe se mantienen válidos. También se hace referencia a la subdivisión B, párrafos 95 a 100 del presente informe.

Artículo 25

Derecho a participar en la gobernanza del país sin restricciones

254. La información proporcionada en el segundo informe nacional de Suriname al Comité en 2003 sobre los derechos de los ciudadanos a participar en la vida pública, el

gobierno del país y las elecciones, etcétera (cap. II.25, art. 25 del Pacto), sigue siendo aplicable.

Artículo 26

No discriminación

255. Como se ha observado precedentemente en este informe, la Constitución menciona de modo explícito en su artículo 8 la igualdad de los individuos ante la ley y el derecho a la protección de la ley de que gozan todas las personas:

"1) Todo individuo que se encuentre en el territorio de Suriname tiene derecho, en condiciones de igualdad, a la protección de su persona y sus bienes.

2) No se discriminará contra nadie por motivos de nacimiento, sexo, raza, idioma, religión, educación, opinión política, situación económica u otras circunstancias."

256. El Ministerio del Interior estableció en 2007 la Comisión sobre Legislación de Género con el fin de revisar la legislación nacional para determinar si creaba desigualdades entre el hombre y la mujer y, en caso de que así fuera, enmendarla. Esta comisión fue inicialmente establecida por un período de seis meses, después del cual su mandato fue prorrogado hasta agosto de 2010. La comisión ya ha expedido sus conclusiones en un informe presentado al Ministerio del Interior. Actualmente se está preparando el establecimiento de una comisión que tendrá como cometido armonizar la legislación nacional relativa a las cuestiones de género con las obligaciones internacionales del Estado.

257. Gracias a los esfuerzos del Ministerio del Interior, Suriname adhirió en 2002 a la Convención Interamericana de Belém do Pará. Este ministerio también redactó una ley para tipificar explícitamente el delito de acoso, que fue adoptada por el parlamento en julio de 2009 y entró en vigor el 8 de mayo de 2012 (SB 2012 N° 70). En este marco general, el Estado procura eliminar posibles desigualdades entre los individuos por motivo de su sexo.

258. Como se ha mencionado precedentemente (véanse los párrs. 20 a 25, que contienen información general sobre el Estado, y el cap. II.27, art. 27 del Pacto, del segundo informe nacional de 2003 al Comité), la República de Suriname es un mundo en miniatura. Es una sociedad multicultural y multilingüe, de lo cual el Estado se enorgullece. Varios grupos étnicos continúan hablando sus propios idiomas y disfrutando la cultura de sus países de origen, y se les permite hacerlo libremente. También en este sentido la política del Estado está dirigida a promover la democracia cultural. El conocimiento de las expresiones culturales de los demás puede fomentar la comprensión mutua y el aprecio y adelanto de los distintos grupos, que son condiciones necesarias para la solidaridad.

259. La política aplicada consiste, entre otras cosas, en mantener registros y transmitir el patrimonio cultural material e inmaterial de todos los grupos culturales. La rica variedad de los valores y otros elementos culturales promueve la creatividad y la unidad nacional para profundizar el desarrollo cultural y fortalecer la identidad cultural de Suriname.

Artículo 27

Respeto de las minorías

260. La Constitución de Suriname no contiene una identificación oficial de todas las minorías. Ello no significa que no se las reconozca. Existen cláusulas de protección en la Ley de Bosques y en la Ley de Minería. Además, los dignatarios indígenas y cimarrones reciben paga del Estado, aunque son nombrados de la manera tradicional y ejercen funciones tradicionales en las comunidades cimarronas e indígenas. Los *gaamans*

(jefes tribales) y los jefes principales reciben prestaciones de la seguridad social, en particular el seguro estatal de salud y el pago de gastos de representación. Aunque no todas las aldeas cuentan con agua y electricidad, hay programas especiales de desarrollo mediante los cuales el Estado les proporciona agua potable y electricidad gratuitas, así como transporte escolar gratuito.

261. Suriname promueve la consolidación de la identidad cultural de los individuos y los grupos independientemente de su origen. La Dirección de Cultura del Ministerio de Educación está al servicio de estas personas y grupos.

262. Para concluir con el artículo 27, el Estado se remite a la subsección B del presente informe, párrafos 101 a 171.

IV. Observaciones finales

263. La República de Suriname ya ha incorporado en su legislación la mayoría de los derechos humanos consagrados en el Pacto y continuará haciéndolo cuando sea necesario. Sin embargo, el Gobierno es consciente de que las disposiciones legales no bastan para hacer que el interés superior sea la consideración primordial de la práctica cotidiana de la prestación de servicios y de los procedimientos jurídicos. Por consiguiente, el Gobierno procura constantemente adaptar sus políticas a las normas relativas a los derechos humanos. En este contexto, ha organizado varios cursos de formación para los interesados pertinentes, por ejemplo funcionarios públicos, funcionarios penitenciarios, agentes de policía, fiscales y jueces, con el fin de impartir conocimientos y fortalecer las capacidades en las cuestiones prácticas vinculadas a los derechos humanos. Durante los últimos cinco años, la enseñanza de los derechos humanos ha figurado en el programa nacional de estudios. El Ministerio de Educación prepara los libros de texto para los grados 4 a 6 de la escuela primaria (niños de 10 a 12 años de edad), principalmente en la asignatura de historia. El departamento competente en materia de programas de estudios sigue elaborando nuevos métodos para incorporar las cuestiones relativas a los derechos humanos en los niveles superiores de educación.

V. Conclusión

264. El Gobierno de la República de Suriname, que representa al Estado parte, declara firmemente que reconoce los derechos humanos fundamentales de todos los individuos sin distinción alguna. Condena la discriminación racial y procura incansablemente cumplir sus obligaciones internacionales, en particular la que dimana del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por ese motivo el Estado presenta este tercer informe periódico en un documento único.

265. El Estado sigue esforzándose por atender todos los motivos de preocupación y aplicar todas las recomendaciones que ha formulado el Comité. No obstante, es plenamente consciente de que, pese al importante progreso que ha realizado, quedan aún algunas cuestiones sin resolver. Por esta razón, el presente documento no es exhaustivo y muy probablemente no abarca todos los aspectos del Pacto.

266. Sin embargo, el Estado, tomando en cuenta los esfuerzos que realiza de buena fe para cumplir las obligaciones que impone el Pacto, está totalmente dispuesto si así se solicita a proporcionar en forma escrita u oral cualquier información adicional relativa a la situación de los derechos humanos, en particular los derechos civiles y políticos, en la jurisdicción de la República de Suriname.